

Decálogo de Buenas Prácticas para la acción social con mujeres migrantes en situación de trata durante el tránsito de África a Europa.

*Generando transferencia de
conocimientos entre la universidad y las entidades sociales*

Nuria Cordero Ramos,
Rafael Cáceres Feria,
Jesús Delgado Baena,
Zineb Emrane

Universidad Pablo de Olavide



Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES



UNIVERSIDAD
**PABLO D.
OLAVIDE**
SEVILLA

Decálogo de Buenas Prácticas para la acción social con mujeres migrantes en situación de trata durante el tránsito de África a Europa.

Generando transferencia de conocimientos entre la universidad y las entidades sociales

Guide to good practice in social intervention with migrant women being trafficked between Africa and Europe.

Aimed at transferring knowledge between universities and social entities

Décalogue de bonnes pratiques d'action sociale avec les femmes migrantes victimes de la traite lors du transit d'Afrique à l'Europe.

Générer le transfert de connaissances entre l'université et les entités sociales

Nuria Cordero Ramos,
Rafael Cáceres Feria,
Jesús Delgado Baena,
Zineb Emrane

Universidad Pablo de Olavide



Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES



Esta guía es el resultado del proceso de ejecución del proyecto:

“Buenas prácticas en acción social con mujeres migrantes próximas a redes de trata en tránsito de Marruecos hacia Andalucía: fomentando la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y centros universitarios” (2015 SEC011) *financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación de la Junta de Andalucía”*

© Los autores

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 – 28015 Madrid
Teléfono (+34) 91544 28 46 – (+34) 91544 28 69
e-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-9148-991-7

Preimpresión:
Besing Servicios Gráficos, S.L.
besingsg@gmail.com

Se trata de depender de otros y de que otros dependan de nosotros. De lo contrario, estaríamos hablando de colonización. El problema no es ser vulnerables, es que alguien explota esa vulnerabilidad. Que el Estado nos abandone política y económicamente es la traducción de esa explotación. Y a la vez, lo que nos une a las personas de otras partes del mundo con las que no compartimos normas ni sistema legal, pero sí el abandono. Somos todas bastante igual de vulnerables, admitámoslo.”

(Butler, J)

Índice

PRÓLOGO	9
DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS	11
DECALOGUE OF GOOD PRACTICES	39
DECALOGUE DE BONNES PRATIQUES.....	65
BIBLIOGRAFÍA	95

PRÓLOGO

Es un placer para mi escribir la presentación de este *Decálogo de Buenas Prácticas para actuar con personas en situación de Trata*. Se trata de un texto que recoge la experiencia y los resultados del proyecto *Buenas prácticas en acción social con mujeres migrantes próximas a “redes de trata” en tránsito de Marruecos hacia Andalucía: fomentando la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y centros universitarios*. España, Marruecos y Camerún son los vértices de un espacio de encuentro de miembros de comunidades educativas y futuros profesionales de la intervención social para sensibilizar y, sobre todo, para generar estrategias y propuestas significativas que permita aproximarnos al fenómeno de la trata de seres humanos teniendo presente su vertiente conceptual; atendiendo a la diversidad cultural y territorial; abordar la trata como una realidad compleja, incluyendo la trata en las políticas migratorias; rehacer los marcos regulatorios de la trata y no ver a las mujeres como víctimas sino como protagonistas; de-construir las prácticas de intervención sesgadas y afrontar el fenómeno desde los derechos humanos, más allá de los vigentes marcos normativos. Estas prescripciones nos conducirán a realizar un tratamiento crítico integral de la trata de seres humanos.

El contenido y las orientaciones que se recogen en este *Decálogo* pretenden, por un lado, servir de orientación para la intervención social por parte de todos los sectores implicados en la lucha contra la trata desde la responsabilidad compartida. Por otro lado, su finalidad es la transformación de la realidad poniendo en tela de juicio las lógicas predominantes actuales desde los que se aborda la *trata*. Estamos ante una *Guía de Buenas Prácticas* que aspira a la transformación y el aprendizaje desde los procesos de resistencia:

Para empezar: Propone la reconceptualización de la trata como un fenómeno complejo que nos que proporcione un nuevo modelo de intervención social integral.

Conocer los contextos diversos: Critica la desigual aplicación de los instrumentos internacionales de protección de las personas dependiendo de la importancia que se le da a los flujos migratorios por parte de los países, lo que lleva a la inacción o a la acción ineficaz por parte de los estados. Igualmente, la nigerianización de las mujeres africanas, homogeneizadas por el color de su piel, por parte de los países occidentales, hace que se olvide el factor cultural diverso y plural de las personas que llegan desde distintos países y contextos culturales africanos.

Prácticas de Intervención integral: La relación que existe entre la trata de seres humanos y las migraciones es innegable, por ello, desde los derechos humanos hay que rehacer los marcos normativos que regulan estos fenómenos, incluyendo la trata dentro de las política públicas que abordan las migraciones. Solo desde esta perspectiva se evitarán las prácticas de intervención sesgadas y que superen el enfoque criminológico y victimizador de las personas sometidas a la trata.

Como se pone de manifiesto en este *Decálogo*, a pesar de que existe una relación clara entre los derechos humanos y la trata de personas, este vínculo se rompe a la hora de dar respuesta a la trata. En muchos casos la trata se califica por los Estados como un problema de inmigración, se le asocia al crimen organizado o de orden público y en esta secuencia de actuaciones los derechos humanos son considerados en última instancia. Es contra de este modelo de intervención se ha ido fraguando un consenso internacional en torno a la necesidad de aplicar a la trata *un enfoque basado en los derechos*. No obstante, como se expone en este *Decálogo*, se pretende superar esa mirada clásica de los derechos humanos entendidos como el derecho a tener derechos, y se postulan como “proceso sociales, normativos económicos y políticos que abren y consolidan espacios de lucha por la dignidad humana” (Herrera, 2008). También resulta especialmente interesante la relevancia de la cooperación internacional como instrumento crítico e integral para abordar la trata de las personas. La cooperación internacional necesita un consenso sobre la trata que supere el modelo hegemónico mundial y favorezca la cooperación descentralizada, permitiendo la creación nuevos espacios en origen y destinos, y redes de organizaciones que luchan contra la trata de personas.

Hay muchas historias de personas valientes y comprometidas en estas páginas que no cesan de relacionarse entre sí. Lo que nos encontramos en este *Decálogo* no es únicamente el resultado de un proyecto de cooperación internacional, es impresionante poder ver el efecto que los aprendizajes adquiridos tiene en aquellos que se entregan con pasión por los derechos humanos y la magnífica aportación que supone un trabajo como este para los luchan contra la trata de las personas. Solo una palabra final: gracias!

MARÍA ISABEL LUCENA CID
Vicerrectora de Internalización

Decálogo de Buenas Prácticas para la acción social con mujeres migrantes en situación de trata durante el tránsito de África a Europa. Generando transferencia de conocimientos entre la universidad y las entidades sociales

INTRODUCCIÓN

La Guía-Decálogo que presentamos pretende ser un material de apoyo para profesionales con interés en trabajar con personas en situación de *trata* en Andalucía.

Esta guía recoge parte de las incertidumbres y certezas forjadas a partir de un proceso de reflexión y dialogo entre profesionales, responsables institucionales, personas de la sociedad civil, mujeres y jóvenes, con el propio equipo de trabajo, formado por investigadoras e investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

Tomando como referencia los aprendizajes derivados del proyecto: *Trata de personas, salud integral y cuidados: mujeres transfronterizas en tránsito de Marruecos hacia Andalucía* (2014 SEC001), nos marcamos una nueva investigación: *Buenas prácticas en acción social con mujeres migrantes próximas a “redes de trata” en tránsito de Marruecos hacia Andalucía: fomentando la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y centros universitarios* (2015 SEC011). Ambos trabajos han sido financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Partiendo del marco epistemológico de la teoría crítica de los derechos humanos y de los enfoques decoloniales y feministas, la finalidad del proyecto ha sido la de generar espacios de dialogo sobre las prácticas de intervención social destinadas a mujeres en situación de *trata*, tanto en los países de origen (Camerún) como en el tránsito (Marruecos) y en destino (Andalucía).

Para ello decidimos acercarnos a los tres contextos ya mencionados. En España seleccionamos: Andalucía, Ceuta. Melilla y Madrid; en Marruecos: Tetuán y Tánger; y Yaundé en Camerún. Nuestro objetivo era conocer las acciones que estaban realizando las distintas organizaciones y dialogar sobre el fenómeno de la “trata de seres humanos” (TSH) y las estrategias que se podrían contribuir a mejorar la atención a las personas en situación de *trata*. Por otra parte, nos propusimos mostrar la realidad de las mujeres que cruzan fronteras de África a Andalucía en los contextos educativos (educación secundaria y universitaria) para sensibilizar y recoger propuestas de acción que se podrían llevar a cabo con jóvenes y con futuros profesionales de la intervención social.

La metodología utilizada ha sido cualitativa, basada principalmente en técnicas participativas a través de grupos de discusión y talleres, lo que nos ha permitido reflexionar conjuntamente con los actores implicados.

La Guía recoge de forma sintética los aprendizajes más destacados. La forma de articularla en diez puntos permite a las lectoras y lectores aproximarse a la complejidad del fenómeno de la TSH de forma rápida, así como abrir la mirada a la diversidad de situaciones y personas que pueden verse afectadas. Asomarse a otros contextos muestra un horizonte de posibilidades para la comprensión de este *fenómeno* más allá de las creencias y estereotipos de la propia cultura.

A la luz de cada uno de los puntos expuestos proponemos algunas “buenas prácticas” que son el resultado de nuestros aprendizajes y que tienen como pretensión servir de orientación para las acciones de intervención social. Estas “buenas prácticas” son propuestas abiertas que se verán enriquecidas por la praxis de una realidad cambiante y dinámica. Los espacios de encuentro entre universidad, educación secundaria y entidades sociales han posibilitado la disposición para ir construyendo nuevos vínculos para el aprendizaje y la responsabilidad compartida.

Desde nuestra posición epistemológica entendemos que el producto de este trabajo tiene una finalidad transformadora y cuestionadora de las lógicas hegemónicas. Intentamos avanzar sobre los cuestionamientos simplistas del fenómeno que llevan a la reproducción de prácticas orientadas a responder a necesidades más que aprender de los procesos de resistencia.

Para terminar, queremos agradecer a todas y cada una de las instituciones que nos han abierto sus puertas para compartir sus aprendizajes, y a todas y cada una de las personas que ha querido participar en este proceso dialógico. Dar las gracias también a quienes nos han facilitado información de los contextos estudiados y, sobre todo, a las mujeres que quisieron contarnos sus experiencias en los talleres. Sin todas y cada una ellas este trabajo no hubiera sido posible.

Gracias.

Equipo de Investigación.

1. ES NECESARIO PROBLEMATIZAR EL CONCEPTO DE “TRATA DE SERES HUMANOS” (TSH): MÁS ALLÁ DEL PROTOCOLO DE PALERMO

Desde principios de siglo XXI existe una atención especial por introducir en las agendas políticas el fenómeno de la “Trata de Seres Humanos”. Un indicador claro del interés por el tema ha sido la implementación por parte de las Naciones Unidas del *Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños* (2000), conocido como Protocolo de Palermo.

El Protocolo conceptualiza la *trata de personas* como “*la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación*” (Protocolo de Palermo 2000: Art.3).

Desde el año 2000 y hasta ahora, todas las acciones para combatir la *trata*, emprendidas tanto por los estados y como por la sociedad civil, apelan a dicha definición sin reparar que estamos ante un concepto analítico y político utilizado por Naciones Unidas. En la actualidad, resulta poco sostenible replicarlo literalmente en las prácticas sociales. Asumirlo sin más conlleva el riesgo de afrontar el fenómeno de la *trata* desde una perspectiva reduccionista y abstracta, cuya consecuencia más inmediata es la generalización de un concepto de *trata* al que se intenta acomodar la realidad de las personas.

Después de casi dos décadas se hace necesario repensar el concepto de *trata* con el fin de generar estrategias de intervención social que tengan presente la complejidad del fenómeno. Dicha complejidad requiere ampliar la conceptualización al menos en tres direcciones:

a. Mirar la TSH como un fenómeno socio-histórico

El concepto de *trata* es relativamente reciente, aunque parece ser, tan solo, una forma nueva de nombrar la explotación humana que tiene sus raíces históricas en el colonialismo. La expansión del eurocentrismo que trajo la modernidad y el liberalismo económico, llevado a todos los rincones del planeta, provocó la extensión de estas prácticas.

En el actual mundo globalizado, este fenómeno se ha extendido y el número de personas afectadas va en aumento. Según los principales informes internacio-

nales los beneficios económicos que genera la TSH están entre los tres negocios más lucrativos del mundo, junto con el tráfico de armas y el tráfico de personas. Estas actividades conforman una triada que fluye a sus anchas gracias a las ganancias que generan a los poderes fácticos.

b. Actualizar el concepto de TSH

Actualizar significa incorporar nuevos elementos. Estos son necesarios para analizar la realidad de TSH desde las diversas formas y finalidades, e incorporar dinamismo en la percepción de las situaciones.

Perspectivas como de la hermenéutica diatópica (Panikar, 2007) intenta buscar espacios comunes para el diálogo sin presuponer que los “otros” tienen los mismos conocimientos y experiencias que “nosotros”. La incorporación de esta perspectiva problematiza la conceptualización de *trata* dada por el *Protocolo de Palermo* que, sin duda, tiene que ser enriquecida con los aportes de otras culturas.

Las actualizaciones que vienen de la mano de perspectivas como esta se presentan como una posibilidad para romper con el dualismo cartesiano que simplifica nuestra forma de conocer el mundo y, también, con el estatismo que lleva a la reproducción acrítica del concepto en la praxis.

c. Conocimiento empírico de la realidad

Se necesita un conocimiento de la TSH nacido de los contextos donde están situados las personas y los colectivos, complementario al conocimiento generalista ofrecido por los datos estadísticos y las mediciones cuantitativas del fenómeno. “El contexto referido al objeto de investigación apunta al conjunto complejo de fenómenos o condiciones que se enlazan y conforman el entorno de los objetos de análisis” (Nohlen, 2011: 4).

Incorporar los contextos en el conocimiento de la TSH supone tener en cuenta las interacciones subjetividades y narrativas que surgen en cada situación concreta. Ignorar esta forma de acercamiento a la realidad es lo que de Sousa Santos (2009) denomina “el desperdicio de las experiencias”.

El concepto de TSH que se propone desde el Protocolo ha de ser problematizado para desaprender la lógica hegemónica y eurocéntrica (Restrepoli y Escobar, 2004) que lo inunda y aprender a incorporar las interacciones, los procesos y las experiencias. Esta forma de conocer nos llevará a una forma de conceptualizar procedente de la razón experiencial, concreta, historizada y dialogada, que permita ir de lo particular a lo general en tema de la TSH.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Superar la reproducción acrítica del concepto de TSH en las prácticas de intervención social.
- ✓ Complementar el conocimiento de los datos estadísticos con un conocimiento situado generado a través de la praxis.

2. HAY QUE CONTEMPLAR LA TRATA DESDE LA DIVERSIDAD TERRITORIAL

La definición de *trata* del Protocolo de Palermo viene condicionada por el contexto donde se debate y aprueba: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; por tanto, no es un instrumento diseñado para defender los derechos humanos y proteger a las víctimas del delito, sino una herramienta que facilita la cooperación para combatir el crimen organizado (Anderson y Andrijasevic, 2008). Su aprobación está estrechamente vinculada a la creciente llegada de migrantes a los países occidentales y al control de fronteras. Esto explicaría que, aunque son muchos los estados que formalmente se han adherido a este documento y han asumido esta interpretación de *trata*, su aplicación varía notablemente dependiendo, entre otras circunstancias, de la importancia que cada nación otorga a la fiscalización de los flujos migratorios. Cuanto más es el interés por regular el tránsito de personas mayor es la atención que se le presta a la “trata de seres humanos”. Así, en general, para los países de origen, emisores de migrantes, la *trata* no se considera un tema relevante hasta que son presionados por los países occidentales para que controlen sus fronteras.

No solo cambia de un país a otro el mayor o menor interés político y la concienciación social por la *trata* de personas sino, también, cómo se entiende esta, y qué colectivos a los que afecta son objeto de atención de las instituciones. Si comparamos las políticas y normativas sobre trata y su aplicación en diferentes estados, podemos comprobar que pese a partir de un mismo concepto, su interpretación difiere considerablemente, adquiriendo significados diferentes.

En España, como en casi toda Europa, la visibilidad de la *trata* ha ido en aumento a medida que se ha producido una mayor presión migratoria. El interés se centra, de manera casi exclusiva, en la explotación sexual de mujeres, hasta el punto de quedar la *trata* asociada a este tipo de delito. Cada vez aparecen con más frecuencias noticias sobre esta cuestión en los medios de comunicación; en cambio, apenas encontramos referencias a otras modalidades de explotación. Sorprendentemente, esta aparente preocupación social contrasta con el hecho de que no exista una ley de *trata*. Las medidas que se toman son mayoritariamente policiales. Las políticas *antitrata* aparece estrechamente ligada a las polí-

ticas migratorias, convirtiendo las campañas *antitrata* en campañas *antiinmigración* (Nieuwenhuys, 2007).

Muy diferente es la situación de la “trata de seres humanos” en Marruecos, un país de emigración, donde la llegada de población africana camino de Europa ha supuesto el acercamiento a una realidad desconocida: la inmigración. La política de la Unión Europea promoverá que Marruecos se convierta en dique de contención de la frontera sur de Europa y será en ese momento cuando irrumpa esta cuestión en la agenda política de este país.

La escasa concienciación social que hay en Marruecos por este tema contrasta con el hecho de que exista una ley de *trata*, cuando muchos estados europeos no la tienen. Sin embargo, en este país norteafricano, la *trata* de personas se percibe de manera muy diferente a Europa. En primer lugar, no se ha focalizado en la explotación sexual de las mujeres. El hecho de que en Marruecos no se reconozca oficialmente la existencia de prostitución ha contribuido a que este no sea el punto de atención de las leyes. También es significativo que la legislación marroquí, que regula la *trata*, contemple una realidad ignorada en Europa: la explotación de menores dentro del país, especialmente de niñas encaminadas al servicio doméstico, las denominadas *petite bonne*; son menores, que proceden, frecuentemente, de entornos rurales y que son utilizadas, a veces por los propios familiares, para la servidumbre doméstica (Ajaouani, 2013), trabajando diariamente en situación de aislamiento, con salarios míseros y abusos verbales, físicos... y sin acceso a la educación (Llorent, 2013).

Más compleja es aún la situación en Camerún, de donde salen miles de mujeres y hombres camino de Europa, Oriente Próximo y Estados Unidos. Lo mismo que otros países africanos, existe una ley, de 2011, contra la *trata* y el contrabando de personas, y un comité interministerial de lucha contra este delito que, en teoría, contempla la aplicación de diversas medidas para la protección y rehabilitación de las mujeres y las niñas que están en situación de *trata*. Sin embargo, estas leyes no se aplican, entre otros motivos, por la falta de recursos.

Atendiendo a la legislación, podría parecer que en Camerún existe una gran concienciación sobre la *trata*, pero todo parece indicar que estas disposiciones responden más a una cuestión de imagen que a una preocupación real. La explotación sexual de camerunesas, tanto en el interior como en el exterior, no se percibe como un problema sino como la consecuencia de la toma de decisión de las personas. Tampoco parece despertar demasiada atención la *trata* de mujeres procedente de otros países africanos, ya que además de ser un país de origen, Camerún también lo es de tránsito. En cambio, existe mucha más preocupación por otras modalidades de *trata*: la explotación económica de cameruneses y camerunesas en los países del Golfo, así como la explotación interna de miles de menores procedentes de áreas rurales, especialmente de la zona norte (Kah, 2016). Los más pobres ceden a sus hijos a familias en mejor situación económica y estas los explotan laboralmente en todos los sectores económicos.

Difícilmente el concepto de *trata*, tal como se plantea en Europa, es asumible en los países africanos, acuciados por numerosos problemas y donde una parte de la población tiene puesta las miras en la salida al exterior. Estas diferencias ponen de relieve que la mirada sobre la *trata* de los países occidentales es etnocéntrica y no contempla la variabilidad territorial del problema.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Es necesario contemplar la trata, no solo desde Europa, sino también desde la óptica de los países de tránsito y origen.

3. RECONOCER LA VARIABILIDAD CULTURAL DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE TRATA

Un número muy elevado de mujeres que están en situación de *trata* en los países europeos proceden de África. Hay unanimidad en los informes sobre este fenómeno, tanto de organismos internacionales como de ONGs, en destacar que Nigeria, el país africano más extenso y poblado, es el principal centro de salida de mujeres hacia Europa. La presencia mayoritaria de nigerianas en las redes europeas de prostitución las han convertido en la cara más visible de este fenómeno, en el prototipo de “victima” de *trata*: en metonimia de la *trata* africana; por esta razón, muchas mujeres de África en Europa pasan a ser calificadas como nigerianas o son consideradas como si realmente procedieran de ese país. Sin embargo, si atendemos a los datos disponibles, comprobamos que las mujeres africanas *tratadas* proviene de países muy diferentes, tanto del norte del continente como de la zona central y occidental.

Si unas veces se reduce al colectivo de mujeres africanas, asimilándolas a *nigerianas*, es aún más frecuente que estas queden englobadas bajo el calificativo de *subsaharianas*, una denominación que, tal como señala el historiador y politólogo nigeriano Herbert Ekwe-Ekwe, más allá de su significado geográfico, utilizado para ubicar a los países localizados al sur del Sáhara, es fruto de una mirada colonialista sobre África:

El “África subsahariana”, indudablemente, es una señal geopolítica racista y quienes la emplean desean representar, una y otra vez, el imaginario de la desolación, la aridez y la desesperanza del entorno desértico (Ekwe-Ekwe, 2010).

Sean clasificadas de manera simplificadora como nigerianas o de modo genérico como *subsaharianas*, estos calificativos sirven para homogenizar, con el color de la piel y la pobreza, a estas mujeres que migran a Europa, ocultando su diversidad. África es un continente diverso y las mujeres que llegan desde allí

reflejan esta pluralidad, ya que no solo proceden de países distintos, sino también de contextos políticos, económicos y culturales muy diferentes. La mayoría de los estados africanos son un reflejo de esta variedad, basta analizar un país como Nigeria para comprobar su enorme complejidad cultural: más de cincuenta lenguas, numerosos grupos étnicos... Es cierto que las nigerianas que llegan a España proceden mayoritariamente del Estado Edó y de una misma ciudad, Benin City, o de poblaciones de los alrededores, sin embargo, también encontramos mujeres de zonas rurales del norte y de otros rincones del país con lenguas, religiones y circunstancias personales dispares. Otro estado africano, Camerún, de donde proceden un creciente número de mujeres en situación de *trata*, aunque con una extensión mucho menor y una población menos numerosa, muestra la misma diversidad étnica, lingüística, religiosa... que quedará reflejada en los proyectos migratorios de las mujeres de este país. La zona norte y sur de Camerún anglófona, con mayoría de población musulmana, presenta unas circunstancias económicas más precarias, una gran inestabilidad política y una mayor violencia institucional. Las mujeres de las regiones anglófonas y francófonas de Camerún difieren en cuanto a las estrategias de emigración: no utilizan los mismos canales para llegar a Europa y eligen distintos países como destino.

Dada esta gran variabilidad, resulta engañoso referirse a las mujeres en situación de *trata* como un único colectivo. Varían en función de la edad, el origen, la etnia, la religión, el nivel educativo... (Brenn, 2005). Es cierto que es posible generalizar, pero no dibujar una especie de retrato robot realizado con una mirada etnocéntrica que las percibe: pobres, analfabetas, supersticiosas, dependientes... proclives a ser engañadas y sin capacidad de agencia. En los medios de comunicación y en algunos informes, encontramos que este cliché se repite. En este sentido, se ha convertido en un lugar común afirmar que es frecuente que las "subsaharianas" en situación de *trata* sean controladas a través de la religión. Puede ser cierto que numerosas mujeres nigerianas son amenazadas a través del uso de la magia, del vudú, del conocido como "yuyú" para ser explotadas, pero no hay que olvidar que estas ideas no son consustanciales a África. En los talleres realizados en Yaundé (Camerún) hemos podido comprobar que estas creencias no son compartidas por todas las africanas que migran. El contexto económico, el nivel educativo, la religión... son sumamente variables, incluso dentro de un mismo país.

Reconocer la diversidad de las mujeres que están Europa en situación de *trata* es un paso necesario, en primer lugar, para superar una mirada victimizadora pero, también, para entender sus circunstancias y brindarles el apoyo necesario. Estas personas no solo proceden de culturas y contextos sociopolíticos heterogéneos, sino que poseen experiencias migratorias distintas que las lleva a tener una percepción muy diferente de su realidad, lo que exige una atención individualizada y sin aplicación de estereotipos.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Sensibilizar a los profesionales vinculados a la trata sobre la importancia de la diversidad cultural en el trabajo con mujeres en situación de trata.
- ✓ Escuchar las voces de estas mujeres, evitando aplicar estereotipos culturales.

4. LA TRATA, UN FENÓMENO COMPLEJO: NO ES SOLO PROSTITUCIÓN, NI INMIGRACIÓN ILEGAL

Un elemento clave en la definición de *trata* en el Protocolo de Palermo es el de *explotación de personas* que se plantea en un sentido global. Sin embargo, la alusión expresa que se hace en este documento a la “explotación sexual” de mujeres y niños, y a la denominada “explotación de la prostitución ajena” ha focalizado toda la atención en esa dirección, simplificando este fenómeno hasta el punto de que la *trata* ha terminado identificándose de manera exclusiva con este tipo de explotación.

El hecho de que en el Protocolo de Palermo no se defina de manera precisa “explotación”, ni otros conceptos como “explotación de la prostitución ajena”, «vulnerabilidad» o «coerción», ha contribuido a crear una cierta confusión (Anderson y O’Connell Davidson, 2002) que ha terminado convirtiendo la *trata* en sinónimo de prostitución, idea que viene reforzada por las posiciones abolicionistas ante el comercio sexual, que lo considera, siempre, una forma de explotación o esclavitud, sin hacer la distinción entre prostitución “forzada” y la “libre elección” (Anderson y Andrijasevic, 2008). Este solapamiento explica que en la actualidad, en cualquier debate que gire en torno a la *trata*, resulte inevitable que aparezca, automáticamente, la cuestión del comercio sexual.

Sin negar que existe una estrecha vinculación entre *trata* y prostitución debemos tener en cuenta que no siempre aparecen asociadas, y el no distinguirlas no solo resulta poco útil para comprender este fenómeno en toda su amplitud sino que, además, contribuye a la victimización y estigmatización de muchas mujeres. Otra de las consecuencias directas de esta falta de claridad es la invisibilización de otras formas de *trata*: explotación económica, tráfico de órganos... Un sector aparentemente tan alejado de la prostitución como el servicio doméstico es un contexto habitual de *trata* en todo el mundo (Lindio-McGovern, 2003; Craig; Gaus; Wilkinson; Skrivankova ; McQuade, 2007) y, sin embargo, no desata la misma alarma social.

La redacción del Protocolo de Palermo hay que situarla en un momento de preocupación de las Naciones Unidas por el control de fronteras para atajar la delincuencia internacional; esta circunstancia marcará profundamente la definición que se hace de *trata*, que se vincula estrechamente al transporte trasnacio-

nal de personas. Este hecho ha terminado por confundir *tráfico* y *trata* de personas por lo que, en la práctica, se ha equiparado a “emigración ilegal”.

La unánime repulsa social hacia la *trata* permite, con el pretexto de combatirla, criminalizar la inmigración, fomentando actitudes xenófobas y endureciendo las políticas migratorias, en una época de feminización de las migraciones, donde a diferencia del pasado son muchas las mujeres que se desplazan solas; favoreciendo medidas represivas y provocando una falta de debate político y social sobre el tema.

No podemos perder de vista que para que exista *trata* no es necesario atravesar fronteras, ya que esta se puede producir, también, dentro de un mismo país, es la denominada *trata interna*, que pocas veces se tiene en cuenta. Es paradójico que se devuelvan a sus países de origen a mujeres en situación de *trata* para “protegerlas”, ignorando que allí pueden estar exactamente en la misma situación.

La *trata* cuando conlleva el tránsito de fronteras, tampoco requiere que la inmigración sea ilegal, ya que los trabajadores y trabajadoras que se desplazan legalmente e, incluso, que trabajan en la economía formal, pueden verse sometidos a situaciones de una gran vulnerabilidad al sufrir amenazas, violencia física, impago de salarios, confiscación de pasaportes... (Anderson y Rogaly, 2005; Calavita, 2004).

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Diferenciar entre prostitución y *trata*, evitando de esta forma criminalizar a las mujeres que se dedican a esa actividad, condenándolas a peores condiciones de vida.
- ✓ Contemplar la *trata* en un sentido amplio, teniendo en cuenta que afecta a todo tipo de población y que presenta múltiples caras, de las cuales la explotación sexual es solo la más llamativa.

5. NO SE PUEDE DESVINCULAR LA TRATA DE LAS POLITICAS MIGRATORIAS

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM), estima que hay 244 millones de migrantes internacionales en todo el planeta, lo que equivale al 3,3% de la población mundial. Cabe destacar que la gran mayoría de las personas no cruzan una frontera cuando migran, es mucho más frecuente que se desplacen dentro de su mismo país; según las estimaciones del PNUD, en 2009 existían 740 millones de migrantes internos.

La migración es un fenómeno que afecta a todo el mundo de forma muy diversa, dependiendo de la ubicación geopolítica de los países de origen. Los me-

dios y herramientas utilizados en este proceso, están ligados a elementos característicos del contexto.

La TSH implica el traslado y movimiento dentro o fuera de un país, siendo los medios utilizados la coacción o la amenaza. Las políticas migratorias restrictivas han generado una situación de vacío en el que los colectivos vulnerables se ven desprotegidos ante los Estados. La represión ha sido la respuesta de las autoridades fronterizas y locales en los países de tránsito y destino para frenar los flujos migratorios. El endurecimiento de las políticas públicas ha dejado a muchas personas en la vulnerabilidad más extrema ante la inaccesibilidad a los derechos fundamentales como seres humanos.

Ante esta situación, nos planteamos la conexión que existe entre “trata de seres humanos” y *migración*; primero por la relación que se deriva del movimiento de población hacia otro Estado o dentro del mismo, tal como recoge la definición de *trata* del Protocolo de Palermo; y segundo, por las herramientas o los medios utilizados para la migración.

Las estrategias de los migrantes frente a las políticas públicas restrictivas sobre migraciones han sido muy diversas; por un lado, a nivel individual muchas personas utilizan las “redes de trata” como una plataforma para salir de sus países y llegar a Europa; otras veces, en el tránsito desde el país de origen al país de destino contactan con estas redes buscando la protección para realizar el trayecto que los Estados les deniegan.

A nivel colectivo, los grupos de personas que abandonan sus países en busca de una vida mejor, se encuentran ante una barrera institucional y unas duras políticas migratorias que configuran un actor clave en la violencia institucional normalizada en las zonas fronterizas de Ceuta y Melilla.

Dependiendo del contexto se utilizan unos medios u otros para el desplazamiento de migrantes. Desde los países occidentales esta situación se analiza sin tener en cuenta que la *trata* tiene particularidades en función de los territorios, de las prioridades de los países y, sobre todo, de la población afectada; el modo de emprender el viaje, a veces, es una decisión individual y, otras, colectiva.

En el caso de Marruecos, existe un movimiento migratorio vinculado al éxodo rural, familias que se trasladan del campo a la ciudad y ceden a sus hijas a un intermediario para que le busque trabajo como empleada de hogar. Hacia Europa, el flujo es más reducido y afecta más a menores de edad no acompañados (MENAS) y a hombres. En cambio, hacia los países de Oriente se produce un gran movimiento de mujeres que frecuentemente están en situación de *trata*. Internamente se visibiliza más a las niñas explotadas en el servicio doméstico que a las mujeres que son objeto de la *trata* internacional. Igualmente, se les da más visibilidad a las mujeres *tratadas* procedentes de otros países africanos que a las marroquíes que son explotadas en los países del Golfo, a pesar de que en Marruecos, la ley 27/14 contra la “trata de seres humanos” protege a las mujeres

al margen de su nacionalidad. Las inmigrantes que no han sido “víctimas de trata” son expulsadas, y ellas son conscientes de este hecho, al igual que las “redes de trata”.

en el caso de Camerún, *trata* y migración van de la mano (Comisión española de ayuda al refugiado, 2018); para miles de personas la *trata* es una estrategia de migración, uno de los modos del salir del país, por lo que no se criminaliza, (Alpes, 2012) se entiende como la consecuencia de una elección, unas veces individuales y otras familiares (Fischer, 2007).

A modo de conclusión, podemos afirmar que la creación de organismos especiales, como la FRONTEX, y dispositivos de represión, genera el debate sobre cómo afectan estas medidas en la transformación del fenómeno migratorio en un proceso de *trata*, como el medio para conseguir un fin. La represión existente y las devoluciones en caliente han llevado a los migrantes a buscar estrategias que legalmente sean puntos fuertes en el país de entrada para conseguir su objetivo. Las alianzas transnacionales están enfocadas más en reprimir que a proteger a las personas vulnerables; no se pone el foco en las personas sino en las circunstancias o los medios de movimiento.

Los actores de la sociedad civil denuncian las campañas contra la *trata* que se utilizan como un medio para luchar contra la migración, provocando alarma social y visibilizando los fenómenos que de este proceso surgen.

Desde los países de origen se está llevando a cabo un trabajo complejo de concienciación social sobre las carencias de la población migrante y de las personas que caen en “redes de trata”.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Tener en cuenta el vínculo que existe entre *trata* y la migración.
- ✓ Promover campañas de información sobre la migración y la trata; realzando el vínculo y las consecuencias derivadas de ambos conceptos dependiendo del contexto.
- ✓ Sensibilizar sobre la utilización política de la *trata* para justificarla la implementación de políticas migratorias cada vez más restrictivas y criminalizadoras.

6. RE-CONOCER LO QUE FALTA POR HACER. MARCOS REGULADORES DE LA TSH

Partimos de lo que dicen los marcos reguladores de la TSH que toman como referencia principal el citado Protocolo de Palermo. Aunque en el Protocolo se menciona en su artículo 2, que la finalidad es triple: “*Prevenir, Proteger y*

Promover la colaboración entre los estados", los desarrollos normativos han priorizado la persecución del delito más que las garantías de protección y el desarrollo de las medidas preventivas. En el año 2010, Naciones Unidas aprobó el *Plan de Acción Mundial para combatir la trata de personas* (Resolución 64/293) donde se dice explícitamente que es para, entre otras cuestiones, ayudar a los Estados Miembros a reforzar sus compromisos políticos y obligaciones jurídicas de prevenir la trata de personas.

Centrando la atención en el entorno europeo, el punto de partida para desarrollar los mandatos del Protocolo es el *Convenio del Consejo de Europa sobre Lucha Contra la Trata de Seres Humanos* (2005), también conocido como Convenio de Varsovia. La mayor parte de los Estados que lo han ratificado han dedicado sus voluntades normativas principalmente a la *persecución* del delito más que a la *protección* y a la *prevención*. Estas responden a una lógica punitiva que tiene como finalidad directa la criminalización de las migraciones (Cordero, 2014). "Al menos en la Comunidad Europea, el Estado legitima y realimenta las fobias sociales, relacionando conceptualmente migración y delincuencia" (Juliano, 2005: 90) y TSH.

En el caso concreto de España no existe una normativa específica sobre la TSH y su regulación viene haciendo a través del Código Penal (artículo 177 bis) y las modificaciones a la Ley de extranjería (LOEX 2011), afianzando claramente el interés por la *persecución* del delito. Con respecto a la *protección* se han promovido dos Planes Integrales, únicas tentativas del Gobierno de España para responder a los compromisos adquirido a través de la ratificación del *Convenio europeo sobre Lucha Contra la Trata*. En el año 2008 se lanzó el primer *Plan Integral de Acción contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual* (2009-2012), y en el año 2015 arranca el segundo *Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual* (2015-2018). En el segundo plan se pueden apreciar avances en algunas cuestiones concretas como: la ampliación del periodo de restablecimiento y reflexión, que pasa de 30 a 90 días; la posibilidad de la existencia de "trata interna", se mencionan aspectos específicos que mejorar la protección de las menores de edad... Sin embargo, ambos planes tienen claras limitaciones como la de dirigir la atención solo a las mujeres y niñas como víctimas de explotación sexual, dejando de lado otras finalidades de la *trata* y a otras personas y colectivos afectados.

Esta asimilación de las políticas públicas entre TSH y prostitución, que se hace en España, está teniendo consecuencias perjudiciales tanto para las mujeres que están en prostitución como las que se encuentran en situación de *trata*. Un ejemplo es la reforma sufrida en 2015 por la Ley de Seguridad Ciudadana donde bajo la premisa de la seguridad ciudadana se sanciona la oferta y la demanda de servicios sexuales en el espacio público (con independencia de que la prostitución se realice de forma libre o forzada). Esta medida permite sancionar a las personas que están en situación de TSH, incumpliendo así los acuerdos de

protección a las víctimas, adquiridos mediante la ratificación del Convenio de Varsovia, y provocando el desplazamiento de la prostitución a lugares más periféricos exponiendo a las mujeres a una mayor vulnerabilidad.

En cuanto a las medidas de *protección* que se han adoptado por parte del Estado español se puede afirmar que son limitadas ya que para garantizar el amparo una persona que se encuentre en situación de TSH tiene que ser considerada una víctima. Los marcos reguladores sostienen una concepción de víctima de *trata* que resulta abstracta, donde no siempre encajan las situaciones concretas que viven las personas. Dicha concepción tiende a reproducirse a través de prácticas sociales que corren el riesgo de contribuir a la revictimización de las mujeres (Flamtermesky, 2014; Women's Link Worldwide, 2014) y a la infantilización de las mujeres procedentes de los países del Sur (Doezema, 2004).

Mientras se hace hincapié en el discurso victimizante (para las mujeres) y criminológico se está dejando de reconocer la falta de compromiso de los poderes públicos por garantizar la protección para todas las personas que se encuentran en situación de TSH y, en los casos específicos donde se de la TSH transnacional, garantizar también la seguridad para las familias en los países de origen.

En cuanto a la *prevención* en el Plan Integral (2015-2018) se hace referencia en la *Prioridad 1* al “refuerzo de la prevención y de la detección de la *trata*”, mencionando 57 acciones a realizar. Aunque no se ha evaluado aún la eficacia de dichas acciones y el cumplimiento de los compromisos por parte de las diversas administraciones implicadas, se puede afirmar que sigue siendo necesaria la formación específica y actualizada de las personas que trabajan en educación, salud, servicios sociales, justicia, medios de comunicación y cuerpos y fuerzas de seguridad, con la finalidad de que puedan promover acciones eficaces para favorecer detección precoz de las situaciones de *trata*.

En el caso de países de tránsito como Marruecos, existe una ley específica contra la “trata de seres humanos”, la Ley 27/14. Esta ley es reciente, se aprobó en el año 2016, concretamente después del discurso del Rey Mohamed VI con motivo del día de la juventud.

Este marco normativo intenta responder principalmente a la situación de las niñas en trabajo doméstico y a la visibilidad de las situaciones de TSH de mujeres procedentes de países como Camerún, Nigeria... Esta ley recoge las recomendaciones de la sociedad civil a través de un proceso participativo impulsado por el Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero, así como asuntos de la migración con la colaboración de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC). Aparte de perseguir a los tratantes, se establece una definición de TSH, que incluye «condenas y un procedimiento, además de medidas preventivas que adoptan el principio de proteger a las víctimas en lugar de procesarlas, a la vez que condenan a los culpables y aumentan las penas contra los autores de delitos contra los niños y las mujeres». El proyecto

brinda protección a víctimas, testigos, expertos y denunciantes (Art. 82-7) y promueve la creación de una Comisión Nacional de Lucha contra la TSH presidida por el jefe de estado.

Los recursos asistenciales para atender a las personas en situación de TSH y tal como se denuncia desde la organización APIS de Tetuán (ubicada al norte de Marruecos), que trabaja con colectivos procedentes de países como Nigeria, Senegal, Costa de Marfil y Camerún. No disponen de herramientas para identificar situaciones de TSH, ni de una hoja de ruta para acompañar a mujeres en situación de vulnerabilidad que acaban ejerciendo la prostitución o la mendicidad. La falta de recursos y la lentitud de los procesos legales para obtener el status de víctima genera una situación de inestabilidad que lleva a las personas a revictimizarse para conseguir beneficios por parte de ONGs que operan en el país y establecen dentro de sus parámetros de acogida la denuncia de la persona como principal criterio de admisión en los recursos que gestionan, CNDH (2016).

En el caso de Camerún como país de origen, existe igualmente la ley 2011/024 contra la TSH aprobada en el año 2011. En el texto se distingue entre TSH, Tráfico y Explotación, recoge las penas correspondientes al ejercicio de cada uno de estos actos pero no se menciona a la víctima. La sociedad civil defiende que es necesario ampliar las disposiciones legales, incluir la protección de las víctimas y a sus familias que sufren las consecuencias de la situación de TSH. En Camerún, la *trata* internacional no es visible, a nivel nacional existe una “trata interna” de Norte a Este de niños/as; las niñas son empleadas en hogares y los niños en mercados. Respecto a la prostitución, está normalizada en el contexto como una consecuencia de la precariedad que viven las familias, especialmente las mujeres que han dejado sus ciudades de origen y se han trasladado para mejorar sus condiciones. El hecho de emigrar para más una decisión individual (de la persona) o colectiva (la familia extendida contribuye para la realización del trayecto).

Camerún es tanto un país de origen y de paso, pero no dispone de una normativa reguladora de la situación de personas en tránsito que requieren de una atención específica, ni de la población autóctona que busca salidas migratorias. Un ejemplo claro es el de los matrimonios concertados a través de internet, mujeres conocen a hombres a través de la Red y se casan para ser reagrupados en Europa; otro caso es el de los estudiantes que aprovechan su estancia con la finalidad de estudiar en España o Francia para quedarse. La utilización de las “redes de trata” es una estrategia comúnmente aceptada con los riesgos que supone. Las personas denominadas “retornados”, expulsados de países europeos reinician el proceso de ahorro o búsqueda de ayuda para volver a hacer.

BUENA PRÁCTICA

- ✓ Hacer una lectura crítica de la legislación *antitrata*.
- ✓ Proponer medidas de incidencia política que garanticen derechos a las personas en situación de TSH.
- ✓ Promover el impulso de políticas públicas superadoras del enfoque criminológico y victimizador.

7. CAMBIAR LA MIRADA SOBRE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE TSH; DE VÍCTIMAS A PROTAGONISTAS

Los marcos reguladores se refieren a las mujeres que están en situación de *trata* como “víctimas” o posibles “víctimas de trata”. Para ello se han ido construyendo indicadores con el fin de establecer perfiles con los rasgos que las identifican. La utilización repetida del término “víctima” para referirse a las personas que han sido explotadas tiene algunas consecuencias que conviene mencionar sintéticamente. La primera consecuencia es “la posición pasiva” en la que se las sitúa. Partiendo del enfoque criminológico dominante en el tema de la *trata*, parece que víctima es aquella persona “que no pudo decidir acerca de su destino, que se encuentra viviendo una situación problemática a causa de la culpa de un tercero” (Peruglia, Reiter y Laffitte, 2013: 10). Las “víctimas de trata” (a las que hacen referencia el Plan Integral 2015-2018) son mujeres que se han enfrentado a numerosos obstáculos en los países de origen, durante los tránsitos migratorios y en los lugares de destino. Aceptar críticamente esta posición es asumir, de facto, la singularidad de la categoría y la pasividad de las mujeres en todas las partes del proceso. Estaríamos definiéndolas a partir de sus necesidades y carencias sin tener en cuenta sus capacidades y resistencias.

Consideramos que es más adecuado hablar de personas en situación de *trata*, para romper con el estatismo que otorga la categoría de “víctima”, al entender que existe un dinamismo propio de la paradoja vulnerabilidad y resistencia (Butler, 2001) que atraviesa la diversidad de situaciones que viven estas mujeres.

Una segunda consecuencia clara son las “limitaciones que existen para la reparación”. En el caso concreto que nos ocupa, parece que las “víctima de trata” tendría “las ventajas para acceder a servicios sociales y de salud” (Alcázar y Cabeza, 2017: 90), aunque, como continúan diciendo las autoras, estas ventajas se vuelven en inconvenientes debido a las dificultades para protegerla.

En el caso de España, la distinción que se establece entre la “detección” de “víctimas de trata”, que pueden realizar los agentes sociales, y la “identificación”, que sólo pueden realizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dificulta la cuestión de la protección y de la garantía de derechos. Esta distinción otorga un

protagonismo especial a los cuerpos y fuerzas de seguridad en la identificación, aunque en el *Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata* (2011) se hace mención a la colaboración de las entidades sociales con las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a las pautas de actuación para la detección, identificación, asistencia y protección de las “víctimas de trata de seres humanos”. Esta referencia a la colaboración de agentes sociales, aunque intenta amortiguar la dureza del proceso de identificación, no logra evitar la desconfianza:

El temor a las autoridades no sólo se manifiesta en las ocasiones excepcionales, sino que acompaña a todo contacto que se mantenga con lo público y tiene que ver fundamentalmente con el miedo a la expulsión, por carecer de permiso de residencia o a que se conozca el trabajo que se realiza (Acien 2014).

El número de víctimas identificada en España sigue siendo escaso teniendo en cuenta las condiciones por las que tienen que pasar no son fáciles de asumir. Actualmente, se les concede un periodo de reflexión de 90 días (*Protocolo marco de protección de las víctimas de TSH*, 2011) que no sólo es insuficiente para lograr generar relaciones de confianza y romper con el temor a las mecanismos de control del Estado, sino que obvia las resistencias para denunciar a personas próximas (familiares, parejas, líderes de las comunidades...) con las que han podido generar el doble vínculo de protección/ explotación (García, 2017).

Una consecuencia más es la perpetuación del estigma y la negación de la capacidad de agencia. La aplicación de la categoría de víctima que se reproduce en los discursos políticos y en las prácticas sociales contribuye a perpetuar el estigma de las mujeres que están en situación de TSH. Compartimos con Mansur (2017: 8) que “la celebración de una víctima genérica – carente incluso de historia – elimina la autonomía de los individuos, convirtiéndolos en seres inertes y sin agencia”. La mayor parte de los discursos de las autoridades y de las políticas públicas presentan a las mujeres en situación de *trata* como: “engañadas”, “obligadas” y “coaccionadas”, invisibilizando la capacidad de agencia que tienen las propias mujeres de decidir a lo largo de las diversas situaciones que atraviesan el proceso. Cada vez son más numerosos los estudios que dan voz a estas mujeres y permiten dejar ver sus capacidades (Flamtermesky, 2014, Jorge, Antolinez y Cordero, 2017). Las personas en situación de *trata* son las protagonistas de sus propias vidas y como tal han de ser sus voces y sus iniciativas las que orienten todo el proceso de intervención, enseñándonos a replegar nuestros discursos de “salvación” y nuestras prácticas “compensatorias”.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Dar voz a las personas en situación de TSH para conocer sus necesidades y demandas, con el fin de orientar los recursos de intervención de manera que respondan a sus necesidades.
- ✓ Potenciar las capacidades de estas mujeres a partir de interacciones, desde modelos de relación menos burocratizados y generadores de relaciones de confianza.

8. HACER “ALGO” DE LO QUE FALTA: DE-CONSTRUIR LAS PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIÓN DE TRATA

Llama la atención que la implementación de las políticas públicas en lo que se refiere a la atención a las personas que están en situación de TSH en los tres contextos estudiados recae sobre la sociedad civil frente a la falta de responsabilidad de los poderes públicos.

En el caso de España, continuando con la lógica marcan discursos políticos, la intervención a las personas que están en situación de TSH está orientada principalmente a las mujeres que están en explotación sexual. Sin embargo, aunque en el Plan Integral (2016-2018) se menciona también a las niñas, el número de entidades, que existen para atender a menores (lo hacen incluyendo a los niños) en situación de TSH o en riesgo de sufrirla, es reducido.

A pesar del reconocimiento que se hace de los y las menores como población vulnerable, existen dificultades para su intervención, derivadas del escaso reconocimiento de estas situaciones y de la falta de medidas políticas concretas. Las personas menores de edad migrantes que llegan España (Fundación Raíces, 2014) son categorizados de forma genérica como MENAS (Menores Extranjeros No acompañados), siendo considerados como tales, invisibilizando las situaciones de *trata* que se puedan dar, al no existir ni profesionales ni recursos especializados para detectar esos casos.

Para implementar prácticas que garanticen el “buen trato” hacia las menores, en Andalucía se hace necesario la creación de centros con personal especializado, evitando así tener que ser atendidos en los recursos propios del sistema de protección general. Estos no están preparados, ni cumplen los requisitos para dar cuidados adecuados a quienes se encuentran en estas situaciones tan específicas.

En Marruecos los menores se encuentran en situación de desamparo, el sistema de protección de la infancia no garantiza su acogida, atención y acompañamiento. La vulnerabilidad provoca que numerosos menores intenten cruzar la

frontera en busca de recursos residenciales, conscientes de las facilidades que en los países europeos tienen por su condición de MENAS. Se dan casos donde son las familias las que abandonan a los menores, sabiendo que van a ser atendidos, como hemos podido comprobar en el CETI de Ceuta.

En el caso de las niñas marroquíes, el fenómeno de TSH se manifiesta en la existencia de las “petites bonnes”, como ya se ha comentado. Son ubicadas por intermediarios, que en la mayoría de los casos suele ser un integrante de la familia, en casas para trabajar en el servicio doméstico. La sociedad civil dispone de programas específicos dirigidos a la prevención y la erradicación de este fenómeno. Se llevan a cabo campañas de sensibilización en el contexto urbano y rural para concienciar a familias y otros actores de la precariedad en la que viven las niñas, denuncian las situaciones que detectan y reclaman el cumplimiento de la ley de escolarización y la prohibición del trabajo infantil. El empoderamiento de la población es la estrategia empleada por las entidades que ven en la acción social y educativa la herramienta adecuada para prevenir la situación de TSH.

En el caso de Camerún está normalizada la situación de precariedad de los menores que trabajan desde una edad muy temprana. Varias entidades afirman que son los propios niños los que justifican a las familias que les envían a trabajar en el mercado debido a su situación económica. En el sur del país son las familias las que ceden a sus hijos a intermediarios para que los empleen en otras regiones con el fin de obtener beneficios económicos. Por lo general, los intermediarios son personas del entorno: un familiar cercano o un líder espiritual que es considerado/a “personas de confianza”.

En Marruecos las mujeres disponen de una especial atención al ser un colectivo vulnerable; las organizaciones a través de proyectos de Cooperación Internacional tienen en marcha diferentes dispositivos de acogida, orientación y acompañamiento. Los esfuerzos que se realizan desde las entidades para ofrecer atención psicosocial y ayuda humanitaria dependen de financiación externa; una vez que se retira la subvención deben buscar ayuda de voluntarios para mantener este apoyo.

En Camerún no existen apenas entidades para atender a las mujeres en situación de *trata*, pues tal como manifiestan algunos profesionales de instituciones humanitarias, socialmente se entiende la TSH es un riesgo que las mujeres contraen voluntariamente como parte del proceso migratorio a Europa.

Desde la sociedad civil, se trabaja la intervención social y educativa, por una parte se llevan a cabo campañas de sensibilización en las comunidades sobre la explotación con fines laborales o sexuales, y por otra parte se ofrecen alternativas formativas, como es un programa de formación profesional para que puedan acreditar una profesión que les genere beneficios económicos. Existen prácticas en las que familia y niño/a son parte de un proyecto común que implica aun

proceso de acompañamiento conjunto; de esta forma la familia apoya iniciativas hacia los menores que a la larga también les beneficiarían a ellas.

En Camerún existen redes de lucha contra el trabajo infantil, contra la TSH y por la reivindicación de los DDHH, si bien trabajan de una forma coordinada como sociedad civil, están muy alejadas de los actores públicos y de las universidades.

En España, las mujeres son atendidas por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la intervención con situación de exclusión y/o a migrantes. La mayor parte de las entidades españolas organizan su intervención para las mujeres “víctimas” de explotación sexual en torno a los siguientes servicios: acogida, orientación laboral, asistencia médica, jurídica, psicológica y capacitación para el empoderamiento.

La provisionalidad de los programas, la burocratización, las urgencias para responder necesidades básicas y el escaso compromiso de los poderes públicos son algunos de los obstáculos a los que se enfrentan las y los profesionales. La escasa dotación de presupuestos y la falta de una Ley Integral que contemple todas las situaciones de *trata* y posibles personas afectadas impiden que, desde la intervención social se puedan dar respuestas globales a las personas en situación de TSH:

Es preciso indagar en el rol asumido por los agentes de la intervención pues algunas prácticas que apuntan a la transformación social y el bienestar, sin proponérselo, pueden estar permeadas por gestos orientados al control de las poblaciones, la individualización de los problemas sociales y la administración de las desigualdades para garantizar el mantenimiento del status quo (Moreno y Molina 2018).

La finalidad de la intervención social ha de estar orientada a acompañar procesos de las personas que están en situación de TSH más allá del control, sin violentar sus decisiones y evitando procesos de revictimización. Una intervención, a medio y largo plazo, que vendría marcada por las “contingencias de los encuentros” (Moreno y Molina, 2018) y que re-conozca a las mujeres como agentes de sus proyectos vitales. Las propuestas de intervención que intentan reproducir los mandatos sesgados de las políticas dominantes están abocadas al fracaso al no poder reproducir en la realidad cotidiana las ideologías que defienden ya que las experiencias prácticas con las mujeres les muestran las propias contradicciones:

El discurso y las prácticas de la otredad también han definido a las mujeres inmigrantes en relación con un cierto ideal de emancipación femenina que es, con frecuencia, el modelo de la mujer occidental (Mayorga, 2012: 57).

Por otra parte, las universidades han de contribuir al avance de la investigación del fenómeno de la TSH, incluyendo como forma de conocimiento los dis-

cursos y las prácticas de los agentes sociales y las voces y experiencias de las personas en situación de TSH, desde el respeto y la responsabilidad compartida.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Deconstruir los discursos y las prácticas que utilizan a las vulneración de derechos de las personas en situación de TSH para responder a intereses ideológicos orientados a “perseguir la criminalidad” y al control estatal,
- ✓ Incluir como sujetos de la intervención social a los y las menores y a otros colectivos.
- ✓ Generar vínculos entre la universidad, los poderes públicos y la sociedad civil para avanzar en el conocimiento del fenómeno de la TSH,

9. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, DEBE TENER UNA MIRADA CRÍTICA E INTEGRAL DE LA “TRATA DE SERES HUMANOS”

La cooperación internacional para el desarrollo, ha pasado por varias fases a lo largo de la historia. En un principio se estableció como una herramienta del desarrollo hegemónico, es decir, del concepto que apareció en la carrera del desarrollismo nacida del discurso del presidente Truman (1947). En este discurso se afirmaba que había suficientes recursos en el planeta para acabar con la pobreza. Bajo esta mirada, se estableció la dicotomía entre países desarrollados, y países subdesarrollados, estableciendo así un modelo único y hegemónico del desarrollo: el desarrollo como elemento universal.

Así, la cooperación internacional nace como una herramienta principal de ese modelo, creando además una estructura de organismos internacionales financieros y no financieros (Breton Woods, Consenso de Washington, etc.) para facilitar que los países continúen la carrera del desarrollo generando deuda y estableciendo prioridades financieras. Esta carrera del desarrollismo ha creado esa brecha global que ha llevado a hablar, durante años, de Norte y Sur.

Es en ese Sur, en este caso nos centramos en África, donde se han situado los principales países de origen de la “trata de seres humanos”, pero podemos establecer paralelismos con Europa del Este, América Latina o los países asiáticos. Regiones que quedaron en la cola del desarrollo hegemónico, especialmente en el caso de africano. Este desarrollismo no es meramente un concepto vinculado a las economías, también está establecido en ideario cultural donde cualquier persona, sea del país que sea, puede afirmar si vive en un país “desarrollado” o no. Es obvio que, en esa dicotomía, los individuos que se establecen en las regiones no “desarrolladas” generan proyectos migratorios con la idea de vivir en regiones

donde la calidad de vida está vinculada a un índice de desarrollo humano alto (IDH).

Ese flujo migratorio, conlleva elementos de autodefensa del sistema global, estableciendo barreras físicas, normativas o burocráticas para la libre circulación de personas. Es en esta situación donde se establece el concepto de “trata de seres humanos”.

La falta de oportunidades de poder circular libremente por diferentes fronteras, creado por el mismo sistema que las cierra, es la que facilita situaciones de “trata de seres humanos”. No se puede entender el fenómeno de la *trata* sin establecer relaciones directas con el modelo hegemónico del desarrollo; por lo tanto, la cooperación internacional a través de los principales organismos internacionales difícilmente abordará la problemática desde una perspectiva integral.

Para poder visibilizar lo expresado anteriormente, nos sirve como ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, impulsados por el PNUD y los países miembros. De estos objetivos podemos pensar que específicamente el 1 (acabar con la pobreza) y el 5 (igualdad de género) están conectados con la “trata de seres humanos”; sin embargo, estos objetivos son meramente descriptivos, sin establecer herramientas concretas que pongan en duda el sistema global. Es aquí donde debemos visibilizar la cooperación internacional más innovadora, la cooperación descentralizada, vinculada a ONGs, Municipios locales, universidades, sindicatos y un sin fin de organizaciones.

El plan andaluz de cooperación para el desarrollo, PACODE, es una herramienta que facilita a las entidades andaluzas establecer elementos que se vinculen a trabajar la *trata* de personas desde una perspectiva más amplia. Nuestro proyecto se enmarca en esta normativa, que establece como elementos principales: reafirmar la necesidad de la cooperación internacional, profundizar en los espacios de los agentes de cooperación y debatir sobre los elementos y zonas prioritarias de actuación.

En este marco, el PACODE hace referencia, precisamente, a la contribución a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores democráticos. La “trata de seres humanos” es un elemento sustancial en este ámbito, visibilizando así una problemática que se caracteriza por la complejidad del concepto.

Igualmente, desde la cooperación descentralizada y la organización civil organizada se puede establecer algunas sugerencias para trabajar contra la “trata de seres humanos”:

1. *En Destino.* Incidencia política: establecer procesos donde se visibilice la dificultad de las personas a transitar libremente a causa, principalmente, de políticas públicas estatales y regionales. Visibilización de las

- personas en situación de *trata*: la necesidad de romper tópicos para poder establecer la complejidad del problema.
2. *En tránsito.* En países que forman parte del itinerario migratorio es necesaria una mayor sensibilización de la sociedad civil y de las diferentes administraciones, igualmente establecer espacios de visibilización de la problemática y de las personas que transitan hacia los países europeos, en el caso de África.
 3. *En origen.* Apoyar procesos donde se establezcan elementos que faciliten la autogestión de los territorios, para que lo proyectos migratorios nazcan de la libre elección de las personas y no de la necesidad imperiosa de emigrar.
 4. *De manera global.* Establecer una mirada feminista del concepto. La *trata* no se puede entender correctamente si no partimos que afecta de manera desigual a hombres y mujeres, estableciendo espacios de mayor vulnerabilidad para las mujeres y menores que son expuestos situaciones de mayor dureza y violencia (en el camino, en el destino, etc.).

Desde la cooperación Sur/Sur, la articulación de redes y de gobiernos nacionales y locales, facilitan una mayor sensibilización a la sociedad civil y a los países de destino, estableciendo así estrategias comunes. Proyecto que establecen desarrollo humano local en zonas fronterizas facilitan una mayor coordinación entre las diferentes organizaciones.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Analizar la *trata* de personas como resultado del modelo hegemónico global de desarrollo, para que la cooperación internacional pueda trabajar en la base estructural del problema.
- ✓ Trabajar en origen, para apoyar procesos de participación ciudadana y de autogestión de los territorios.
- ✓ Trabajar en destino mediante la incidencia política y bajo una perspectiva feminista, estableciendo así procesos de cambio estructurales en las políticas públicas, especialmente migratorias.
- ✓ Generar alianzas desde la cooperación descentralizada y la cooperación sur - sur, como espacios innovadores de colaboración que permiten una mayor articulación entre las redes de organizaciones que trabajan contra la “trata de seres humanos”.

10. PARA ABORDAR LA TRATA DESDE LA MIRADA DE LOS DERECHOS HUMANOS HAY QUE ROMPER CON LA MIRADA MERAMENTE NORMATIVA

Hacer un análisis del concepto de *trata* desde una perspectiva clásica de los derechos humanos nos posiciona desde un marco normativo y jurídico. Esto nos obliga a entender que las personas tienen el derecho a movilizarse libremente entre fronteras. Pero desde esta perspectiva no se plantean valores, ni la posibilidad de ejercer procesos que faciliten el derecho a hacerlo, ya que desde esta mirada la *trata* se contempla, esencialmente, desde la norma, desde el ámbito jurídico. Es decir, instituye a las personas como elementos individuales y autónomos con esos derechos, sin establecer otras miradas que son necesarias para entender la complejidad de la TSH.

Desde esta óptica se entiende al “otro” de una manera generalizada, y el jurista, ante esto, se preocupa, principalmente, de las garantías legales que permiten que las personas tengan esos derechos. Es decir, la TSH desde una mirada clásica de los DDHH se focaliza en el Derecho a tener derechos.

Este enfoque dificulta la manera de abordar los derechos humanos y la *trata* de personas, ya que la norma no nos permite establecer que elementos estructurales causan el problema. La TSH hay que entenderla de una manera integral como producto de múltiples factores: socios históricos, económicos y normativos.

Por lo tanto, para analizar la TSH desde los derechos humanos, nos posicionamos en un paradigma crítico, entendiendo que “los Derechos Humanos son procesos sociales, normativos, económicos y políticos que abren o consolidan espacios de lucha por la dignidad humana” (Herrera, 2008).

Como hemos señalado, desde este punto de partida tenemos que comprender tanto las condiciones de discriminación como la base sistémica o estructural que las produce. En el caso de la *trata* de personas se sufre el no poder ejercer el libre ejercicio de desplazarse entre fronteras, lo que provoca que las personas, en muchos casos y de manera forzada, establezcan procesos que va en contra su propia dignidad. Abordar la *trata* desde este paradigma nos obliga, por un lado, a

- *Visibilizar*, realizando un análisis epistémico del problema. En este caso la *trata* es un elemento que tiene que tener en cuenta la diversidad territorial a la que afecta. En los países de origen (teniendo en cuenta que no existe una homogeneidad entre ellos), el motivo por el cual una persona se encuentra en esta situación es muy diverso, sin embargo, hay que partir de un punto común: la necesidad inherente del ser humano a moverse territorialmente y buscar espacios donde se tenga mayor accesibilidad a bienes materiales e inmateriales que permitan la dignidad humana. Es decir, la *trata* es un elemento más, vinculado a los proce-

sos migratorios, causados por la desigualdad global existentes, y por la dificultad de poder acceder con mayor facilidad a países de índice de desarrollo humano alto. En el caso de África, no podemos entender esta situación si no lo analizamos desde una perspectiva decolonial, ya que es un territorio intervenido y explotado, desde hace siglos, por países externos que han causado que la región se encuentre en situaciones de alta desigualdad, con graves problemas económicos y sociales. En los países de tránsito, la problemática va vinculada a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran especialmente mujeres y menores en la ruta hacia los países de destino. Precisamente en ese destino, el principal problema es la situación de explotación en la que se encuentran las personas que han conseguido llegar a destino, a través de una deuda contraída para financiar el traslado.

- *Desestabilizar*, posicionándonos éticamente ante la situación de explotación de estas personas. Esto nos lleva a exigir, a través de la sensibilización y la incidencia política, cambios en las políticas transfronterizas. La necesidad de evidenciar los lazos entre la *trata* de personas y otros factores como migración y frontera, es imprescindible para no focalizar la atención únicamente en el ámbito de la prostitución y el tráfico de personas. Abordar la *trata* desde el paradigma de la teoría crítica de los derechos humanos exige complejizar el concepto y visibilizar los matices.
- *Transformar*, generando procesos políticos que creen espacios de dignidad humana. Con un marco adecuado, establecido por la libertad de circulación de personas, podremos fijar medidas que impidan las “redes de trata” y que nos lleven a evitar la explotación; siempre desde una mirada feminista que nos permita implantar y entender que la mayor vulnerabilidad recae en mujeres y menores.

Trabajar desde los derechos humanos nos lleva a generar espacios de lucha, donde cualquier territorio, desde su propio contexto y cultura, desde el criterio de riqueza humana y desde una posición feminista decolonial, permita a las personas tener una vida digna.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Contextualizar la *trata* de personas dentro del modelo económico global, analizándolo como resultado de los procesos y flujos migratorios actuales.
- ✓ Generar procesos de lucha por la dignidad de las personas afectadas por la *trata*, estableciendo elementos de empoderamiento, especialmente para los sectores más vulnerables.

**Guide to good practice in social intervention
with migrant women being trafficked
between Africa and Europe,
aimed at transferring knowledge
between universities and social entities**

INTRODUCTION

The present Decalogue-Guide is directed to professionals interested in working with people subject to *human trafficking* in Andalusia.

The guide is a collection of both the uncertainties and certainties that emerged from discussions between professionals, institutional managers, civil society, women, youth, and our work team i.e., researchers from the Pablo de Olavide University (Seville).

Based on the lessons learned from the project: *Human Trafficking in persons, comprehensive health and care: cross-border women in transit from Morocco to Andalusia* (2014 SEC001), we undertook a new study: *Good practices in social action aimed at migrant women vulnerable to “trafficking networks” in transit from Morocco to Andalusia: promoting cooperation between civil society organizations, public institutions and university centres* (2015 SEC011). Both works were financed by the Andalusian Agency for International Development Cooperation (or AACID by its Spanish acronym).

Within the epistemological framework of critical theory of human rights and of decolonial and feminist approaches, the purpose of the project was to create a platform for discussing social intervention practices concerning human trafficked women, both in countries of origin (Cameroon), transit (Morocco) and destination (Andalusia).

To do this, we approached the three geographical areas mentioned above. In Spain we selected: Andalusia, Ceuta. Melilla and Madrid; in Morocco: Tetouan and Tangier; and Yaoundé in Cameroon. Our objective was to understand the actions undertaken by various organizations and discuss the phenomenon of “human trafficking” as well as strategies to increase the attention given to people in trafficking situations. Moreover, we set out to uncover the realities of women who cross borders from Africa to Andalusia and illustrate them in educational contexts (secondary and university education). The objective was to raise awareness and collect proposals of initiatives that could be carried out with young people and future social intervention professionals.

The methodology used was qualitative, based mainly on participatory techniques through discussion groups and workshops, allowing us to share reflections with the actors involved.

The Guide provides a synthesis of the most important findings. The ten points offer readers a quick approach to the complexity of Human Trafficking, opening their eyes to the wide range of potentially affected people and situations involved. Being exposed to other contexts opens a whole new spectrum of possibilities. It enables approaching this *phenomenon* beyond the beliefs and stereotypes of one's own culture.

In light of each of the above points we propose some “good practices” that emerged from our learning. They aim at guiding social intervention actions. These “good practices” are open proposals to be enriched by the praxis of changing realities. The meeting platforms brought together the university, secondary education and social entities. They fostered potential connections for learning and the sharing of responsibilities.

From our epistemological perspective, this work aims at transforming and questioning the hegemonic logic. We tried to go beyond simplistic approaches that lead to responding to needs rather than learning from processes of resistance.

To finish we wish to thank each institution that was willing to share its knowledge, and each person who wished to participate in the dialogical process. We also want to thank those who provided information on the contexts under study, and, above all, the women who told us about their experiences during the workshops. This work was only possible thanks to each and every one of them.

Thank you.

The research team

1. THE CONCEPT OF “HUMAN TRAFFICKING” MUST BE PROBLEMATIZED: BEYOND THE PALERMO PROTOCOL

Since the beginning of the 21st century, special attention has been given to introducing the phenomenon of “Human Trafficking” into political agendas. The United Nations implementation of the *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (2000), known as the Palermo Protocol, is a clear indicator of the interest in this issue.

The Protocol conceptualizes human trafficking as “*The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, including exchange or transfer of control over that person, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation*

” (Protocol of Palermo 2000: Art.3).

From year 2000 until now, all initiatives to combat trafficking, undertaken by states or by civil society, invoke this definition disregarding the fact that this definition is in fact an analytical and political concept used by the United Nations. Applying it literally to social practices is nowadays untenable. Limiting our understanding of trafficking to this definition can lead to a reductionist and abstract interpretation of the phenomenon. The immediate consequence is that of generalizing the concept of *trafficking* trying to fit people’s realities to the concept.

Almost two decades have passed. It is now necessary to rethink the notion of *trafficking* and design social intervention strategies that embrace the complexity of the phenomenon, broadening the concept of *human trafficking* in at least three directions, as described below.

a. Understanding Human Trafficking as a socio-historical phenomenon

The concept of *human trafficking* is relatively recent, though it can be interpreted as a new name for an old form of human exploitation historically rooted in colonialism. The expansion of Euro centrism that brought modernity and economic liberalism to the four corners of the earth led to disseminating the practice.

In today's globalized world, the phenomenon has spread and the number of people affected is increasing. According to major international reports, Human Trafficking, is among three of the world's most lucrative businesses, together with arms trafficking and people smuggling.

b. Updating the concept of Human Trafficking.

To update can be defined as incorporating new elements. It is necessary to consider these new elements to approach the different forms and finalities of Human Trafficking and build a dynamic understanding of realities.

Perspectives such as diatopical hermeneutics (Panikar, 2007) aim at finding common grounds for dialogue without assuming that "others" have the same sort of knowledge and experience as "us". This approach enables to problematize the conceptualization of trafficking provided by the Palermo Protocol, which undoubtedly needs to be enriched with contributions from other cultures.

The updates resulting from this type of approach allows to break with Cartesian dualism that leads to a simplification of our knowledge of the world and statism, i.e. the uncritical reproduction of the concept in practice.

c. Empirical knowledge of reality

We need to build our knowledge of THB taking the geographical contexts of people and groups into account and complementing it with general knowledge provided by statistical data and quantitative measurements of the phenomenon. The context of a research subject consists in a complex intertwining of phenomena or conditions making up the environment of the objects under study (Nohlen, 2011: 4).

Incorporating contexts on human trafficking knowledge implies taking interactions, subjectivities and narratives emerging from each concrete situation into account. Forgetting to approach reality this way is what Sousa Santos (2009) calls "wasting experiences".

The human trafficking concept referred to in the Protocol must be problematized so as to unlearn its dominating hegemonic and Eurocentric logic (Restrepro & Escobar, 2004) and to learn to incorporate interactions, processes and experiences. This way of knowing allows us to build conceptualizations that emerge from experiential, concrete, historicized and dialogued reason: it allows us to go from an individual perspective to a general understanding of human trafficking.

GOOD PRACTICES

- ✓ Go beyond the uncritical reproduction of human trafficking concept in social intervention practices.
- ✓ Complement knowledge of statistical data with situated knowledge generated through praxis.

2. TERRITORIAL DIVERSITY MUST UNDERLIE OUR UNDERSTANDING OF HUMAN BEING TRAFFICKING

The definition of *human trafficking* in the Palermo Protocol was conditioned by the context in which it was debated and approved: the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Therefore, the instrument is not designed to defend human rights and protect victims from crime, but to facilitate cooperation in the fight against organized crime (Anderson & Andrijasevic, 2008). Its approval is closely linked to the growing numbers of migrants flowing into Western countries and to border control issues. This would explain that although many states formally adhered to this document and adopted this interpretation of *human trafficking*, implementations vary considerably, depending, among other things, on the importance each nation gives to the control of migratory flows. The higher the interest in regulating the transit of people, the greater the attention paid to "*human trafficking*". Thus, countries of origin, i.e. those that produce migrants, do not tend to consider human trafficking as a relevant issue until they are pressured by Western countries into controlling their borders.

Not only does political interest and social awareness vary from one country to another, but also the understandings of person in human *trafficking* situation, and which groups receive institutional attention. When comparing different states' trafficking policies, regulations and implementations, considerable differences in their interpretations can be observed. They seem to acquire different meanings despite being based on the same concept.

In Spain, as in almost all of Europe, *human trafficking* has gained visibility with the increase of migratory pressure. The focus has been almost exclusively on women's sexual exploitation, to the point that *human trafficking* has become associated with this type of crime. Ever more news items appear in the media on this issue but other forms of exploitation are rarely reported. Surprisingly, there is no law on *trafficking* despite apparent social concerns. Any measures are taken mostly by the police. *Anti-trafficking* policies seem closely tied to migration policies, turning *anti-trafficking* campaigns into *anti-immigration campaigns* (Nieuwenhuys, 2007).

The situation of “human trafficking” in Morocco, a country of emigration, is very different: the arrival of Africans on their way to Europe has drawn them into a hitherto unknown reality: that of immigration. European Union policies are going to encourage Morocco to become Europe’s southern safety net. When this happens, the issue will flare up into the country’s political agenda.

Morocco’s scarce social awareness about this issue is in sharp contrast with the fact that the country has a *human trafficking* law, while many European states do not. However, *human trafficking* is understood very differently in this North African country than in Europe. To start with, no attention is given to women’s sexual exploitation. The fact that Morocco does not officially recognize the existence of prostitution has contributed to the absence of laws on sexual exploitation. It is also significant that Moroccan legislation on *trafficking* addresses a reality overlooked in Europe: the exploitation of minors within the country, especially of girls destined for domestic service, the so-called *petites bonnes*. These girls are minors, often from rural areas and subjected, sometimes by their own families, to domestic servitude (Ajaaouani, 2013), working daily in a situation of isolation, with miserable salaries, abused verbally, physically, etc. and with no access to education (Llorent, 2013).

The situation in Cameroon is even more complex: thousands of women and men are leaving the country for Europe, the Middle East and the United States. Like other African countries, a law is in place, since 2011, against human *trafficking* and smuggling, as well as an interministerial committee to combat the crime. In theory, the law provides for the implementation of various measures to protect and rehabilitate women and girls who are trafficked. However, these laws are not applied, among other reasons for lack of resources. (SPANISH COMMISSION FOR REFUGEES, 2018)

Given Cameroon’s legislation, the country appears to be highly concerned with trafficking. However, everything seems to point to the fact that these provisions respond more to a question of image than true concern. Sexual exploitation in Cameroon, both inside and outside the country, is not perceived as a problem but as the result of people’s decisions. The *trafficking* of women from other African countries does not seem to attract much attention either, since Cameroon is not only a country of origin, but also of transit. On the other hand, there is much wider concern about other forms of *trafficking*: the economic exploitation of Cameroon women and men in the Gulf countries, as well as the internal exploitation of thousands of children from rural areas, especially in the north (Kah, 2016). The poorest give their children to better-off families who exploit them across all economic sectors.

Europe’s concept of *trafficking* is difficult for African countries to adopt. They are beset by numerous problems and parts of their population aspire to going abroad. These differences highlight that Western views on *trafficking* are ethnocentric and do not take territorial variations into account.

GOOD PRACTICES

- ✓ It is necessary to understand *human trafficking* not only from a European perspective, but also from the perspective of countries of transit and origin.

3. RECOGNIZE THE CULTURAL VARIABILITY OF WOMEN IN HUMAN TRAFFICKING SITUATIONS

A large part of the women who are trafficked in European countries come from Africa. Reports, issued both by international organizations and NGOs, unanimously point to Nigeria, the most extensive and populated African country, as the major exit point of women leaving for Europe. Nigerians' major presence in European prostitution networks has turned them into the most visible face of the phenomenon, in the prototype of *human trafficking* "victim": a metonymy of African *human trafficking*. For this reason, many African women in Europe are called Nigerian or are considered to genuinely come from the country. However, based on the available data, *trafficked* African women actually come from very different countries, both from the north and the central and western parts of the continent.

While African women are sometimes assimilated to Nigerians, they are even more frequently reduced to the denomination of sub-Saharan. As noted by the Nigerian historian and political scientist Herbert Ekwe-Ekwe, the term "Sub-Sahara", beyond its geographical reference to countries located south of the Sahara, is the result of a colonialist vision of Africa:

'Sub-Sahara Africa' is undoubtedly a racist geopolitical signature in which its users aim repeatedly to present the imagery of the desolation, aridity, and hopelessness of a desert environment (Ekwe-Ekwe, 2010).

Whether simplistically classified as Nigerian or generically called sub-Saharan, these qualifiers, based on skin colour and poverty, homogenize women who migrate to Europe concealing their diversity. Africa is a diversified continent. Women who arrive from Africa reflect this plurality: not only do they come from different countries, but also from very different political, economic and cultural backgrounds. Most African states reflect this variety. Suffice it to approach a country such as Nigeria to witness its enormous cultural complexity: more than fifty languages, numerous ethnic groups, etc. Nigerians arriving in Spain do come mostly from the State of Edó and from the same city, Benin City, or from nearby towns; however, some women also come from northern rural areas and from other parts of the country, with different languages, religions and personal circumstances. Another African state, Cameroon, though smaller in

size and population, is today generating a growing number of *trafficked* women illustrating similar ethnic, linguistic, religious, etc. diversity. This is reflected in the migratory projects of women from this country. The northern and southern parts of English-speaking Cameroon have a majority Muslim population. They present more precarious economic circumstances, great political instability and greater institutional violence. Women in the English-speaking and French-speaking regions of Cameroon differ in terms of emigration strategies: they do not use the same channels to reach Europe and choose different destination countries. (ALPES, 2012 y 2013)

Given this great variability, referring to women in *trafficking* situations as a single group is misleading. They vary according to age, origin, ethnicity, religion, educational level, etc. (Brenn, 2005). While some generalization is possible, we must avoid depicting them based on our ethnocentric perceptions, i.e. poor, illiterate, superstitious, dependent, prone to betrayal and incapable of agency. This is a recurring cliché in the media that can also be found in some reports. In the same way, it has become commonplace to claim that *trafficked* "sub-Saharan" are manipulated through religion. It may be true that magic or voodoo, known as "*juju*" is used to threaten many Nigerian women, but let us remember that these ideas are not inherent to Africa. During the workshops held in Yaoundé (Cameroon), we found that not all migrating Africans shared these beliefs. Economic contexts, educational levels, religion, etc. are highly variable, even within the same country.

Recognizing the diversity of *trafficked* women in Europe is a necessary step: firstly, it allows us to regard them beyond their figure of victims and secondly, to understand their realities and provide them with the support they need. These women do not only come from heterogeneous socio-political cultures and backgrounds, they also go through different migratory experiences. Thus, they have disparate perceptions of their own situations, which call for individual attention and moving beyond stereotypes.

GOOD PRACTICES

- ✓ Raise awareness among professionals on the importance of cultural diversity when working with *trafficked* women.
- ✓ Listen to the voices of these women and avoid cultural stereotypes.

4. TRAFFICKING, A COMPLEX PHENOMENON: NOT ONLY PROSTITUTION NOR ILLEGAL IMMIGRATION

In the Palermo Protocol, the broad meaning of *exploitation of people* is key to the definition of *trafficking*. However, the document's specific reference to the "sexual exploitation" of women and children, and the so-called "exploitation of the prostitution of others" has drawn all the attention, simplifying the phenomenon to such an extent that *trafficking* is now identified exclusively with this type of exploitation.

The fact that the Palermo Protocol does not define "exploitation" precisely, or other concepts such as "exploitation of the prostitution of others", "vulnerability" or "coercion", has contributed to the confusion (Anderson & O'Connell Davidson, 2002). *Trafficking* has thus become synonymous with prostitution. Abolitionist views regarding the sex trade enhance this interpretation, as they systematically understand it as a form of exploitation or slavery, without distinguishing between "forced" and "free choice" prostitution (Anderson & Andrijasevic, 2008). This overlap explains that the sex trade is automatically mentioned in debates related to *trafficking*.

Without denying that *trafficking* and prostitution are closely linked, we must bear in mind that they do not always go hand in hand. Failing to distinguish them not only makes it harder to understand the phenomenon in its entirety, but also contributes to stigmatizing many women and turning them into victims. Another direct consequence of this confusion is the concealment of other forms of *trafficking*: economic exploitation, the organ trade, etc. Domestic service, seemingly far-removed from prostitution, is a commonly practiced *trafficking* activity around the world (Lindio-McGovern, 2003; Craig, Gaus, Wilkinson, Skrivankova & McQuade, 2007). It does not unleash, however, the same degree of social alarm.

The drafting of the Palermo Protocol must be placed in its context: the United Nations, in its battle against international crime, was concerned with border control, an issue that deeply influenced the definition of *trafficking*, closely linked to the transnational transport of people. *Smuggling* ended up being confused with *trafficking* of human beings so in practice, it has been equated to "illegal emigration".

Society unanimously rejects *trafficking*. On the pretext of combating it, immigration is being criminalized, encouraging xenophobic attitudes and ever tougher migration policies, at a time where migration is being feminized, and where, unlike in the past, many women travel alone. Repressive measures are thus being encouraged and the subject is being not being sufficiently debated in political and social circles.

We must not forget that *trafficking* does not necessarily involve crossing borders. It also takes place within single countries — so-called internal human trafficking — which rarely draws attention. Paradoxically, *trafficked* women are returned to their countries of origin in order to “protect” them, overlooking the fact that they may find themselves in the same situation back home.

When *trafficking* does involve border transit, it does not require illegal immigration since workers who move legally and even work in the formal economy may be in highly vulnerable situations, undergoing threats, physical violence, unpaid wages, passport confiscation, etc. (Anderson & Rogaly, 2005; Calavita, 2004).

GOOD PRACTICES

- ✓ Differentiate between prostitution and *human trafficking*, thus avoiding criminalizing women who engage in the activity, condemning them to worse living conditions.
- ✓ Understand that *trafficking* has a broad meaning: it affects all types of people and has multiple facets. Sexual exploitation is only the most visible.

5. TRAFFICKING CANNOT BE DISSOCIATED FROM MIGRATORY POLICIES

The International Organization for Migration (IOM) estimates that there are 244 million international migrants worldwide, accounting for 3.3% of the global population. It is worth noting that the vast majority of people do not cross a border when they migrate: travelling within one's own country is much more common. According to UNDP estimates, there were 740 million internal migrants in 2009.

Migration affects the whole world in many different ways, depending on the geopolitical location of the countries of origin. The means and instruments used depend on specific contexts.

Human trafficking implies transfer and movement within or outside a country, by means of coercion or threats. Restrictive migration policies have created a vacuum in which vulnerable groups are unprotected by States. Border and local authorities in transit and destination countries have responded with repressive measures to curb migratory flows. The hardening of public policies has left many people in extremely vulnerable situations because of their lack of access to basic rights as human beings.

In the light of this, we examined the relationship between “human trafficking” and *migration*. First, we looked at the links with the movements of populations to other countries or within their own country, as reflected in the definition of *human trafficking* in the Palermo Protocol; and second, we focused on the instruments or means used for migration.

Faced with restrictive public migration policies, migrants have adopted a wide range of strategies. On the one hand, many people use “human trafficking networks” on an individual basis to leave their country and reach Europe; in other cases, they contact these networks while in transit from their country of origin to their country of destination as they seek some protection during their journey that is denied to them by the States.

At a collective level, groups of people who leave their countries in search of a better life face institutional barriers and harsh migratory policies. The latter play a major role in Ceuta and Melilla’s border areas’ normalized institutional violence.

Different means are used for migrant travel depending on the context. In Western countries, the situation is studied overlooking the fact that *Human trafficking* has territorial characteristics according to countries’ priorities and, above all, according to the affected population; means of travel is sometimes an individual decision and, at others, a collective one.

In Morocco, some migratory movements are linked to rural exodus: families move from the countryside to cities and hand over their daughters to intermediaries to find them domestic worker placements. Flows toward Europe are smaller and tend to involve unaccompanied minors and men. On the other hand, there are large movements of frequently *trafficked* women to Eastern countries. Internally, girls exploited in domestic service are more visible than women subject to international *trafficking*. Similarly, *trafficked* women from other African countries are given more visibility than Moroccan women who are exploited in the Gulf countries, despite Morocco’s Law 27/14 against “Human Trafficking” that protects women regardless of their nationality. Immigrant women who have not been “victims of trafficking” are expelled. These women, as well as “trafficking networks”, are aware of this fact.

In the case of Cameroon, *trafficking* and migration go hand in hand; for thousands of people, human trafficking is a migration strategy, a means of leaving the country, so it is not criminalized, it is understood as an individual choice, or sometimes the family’s.

To conclude, the creation of special policies — such as FRONTEX — and repressive mechanisms lead to debates on how these measures affect the transformation of migratory phenomena into *human trafficking* practices as a means to an end. Existing repression and clamorous returns have led migrants to seek strategies based on strong legal backings in the country of entry to achieve

their goals. Transnational alliances focus more on holding vulnerable people back than on protecting them; situations or means of movement are addressed, but not the people themselves.

Actors in civil society denounce anti-trafficking campaigns used to fight migration, arousing social alarm and giving visibility to the emerging phenomena.

The countries of origin are conducting the complex task of raising social awareness on the deprivations suffered by migrant populations and by the victims of “trafficking networks”.

GOOD PRACTICES

- ✓ Take the relationships between *human trafficking* and migration into account.
- ✓ Promote information campaigns on migration and *human trafficking*, drawing attention to the links between both processes and their consequences depending on the context.
- ✓ Raise awareness about the political use of *human trafficking* to justify increasingly restrictive and criminalizing migratory policies.

6. RE-IDENTIFY WHAT NEEDS TO BE DONE. THB REGULATORY FRAMEWORKS

Our starting point consisted in *Human Trafficking* regulatory frameworks, based on the Palermo Protocol mentioned above. Although Article 2 of the Protocol mentions that its purpose is threefold: “Prevent, Protect and Promote collaboration among states”, regulatory developments have given priority to crime prosecution rather than to guarantees of protection and preventive measures. In 2010, the United Nations approved the *Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons* (Resolution 64/293), which explicitly states the aim, among other issues, of helping Member States to strengthen their political commitments and legal obligations regarding the prevention of human trafficking.

In Europe, the first step in the implementation of the Protocol's mandates consisted in the *The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings* (2005), also known as the Warsaw Convention. Most of the ratifying States have oriented their regulations towards crime *prosecution* rather than *protection* and *prevention*. Their underlying logic is punitive and their direct objective is to criminalize migrations (Cordero, 2014). “At least in the European Community, the State legitimizes and replenishes social phobias, creating conceptual links between migration and delinquency” (Juliano, 2005: 90) and THB.

Spain has no specific human trafficking laws is regulated by the Criminal Code (Article 177 bis) and the amendments to the Aliens Act (LOEX 2011), clearly consolidating a focus on crime *prosecution*. The only attempts by the Spanish Government to fulfil its commitments following the ratification of the *European Convention on Action against Trafficking* are two Comprehensive Plans dealing with protection. In 2008, the first *Comprehensive Plan of Action against Human Trafficking for sexual exploitation* (2009-2012) was launched, and in 2015 the second *Comprehensive Plan against the Trafficking of Women and Girls for sexual exploitation* (2015-2018) was established. The second plan brought about visible progress in specific domains such as: the extension of the recovery and reflection period, from 30 to 90 days; the possibility of the existence of “internal trafficking”; specific points regarding improvements to the protection of minors, etc. However, both plans have clear limitations, such as focusing on women and girls as victims of sexual exploitation, leaving aside other trafficking objectives and other affected persons and groups.

Assimilating human trafficking with prostitution in public policies, as in the case of Spain, is harmful both for women working in prostitution and for those undergoing *trafficking*. One example is the 2015 Citizen Security Law reform, sanctioning the supply and demand of sexual services in public spaces (regardless of whether prostitution is freely or forcefully practiced) on the premise of citizen security. This measure leads to punishing people undergoing human trafficking, thus violating agreements on victim protection, based on the ratification of the Warsaw Convention, and causing prostitution to move to more peripheral locations putting women at greater risk.

For their part, *protection* measures adopted by the Spanish State are limited, since persons undergoing human trafficking must be considered victims for their protection to be guaranteed. Regulatory frameworks are based on an abstract notion of victim of trafficking that does not always correspond to people’s concrete situations. The notion tends to reproduce itself through social practices that run the risk of contributing to the re-victimization of women (Flamtermesky, 2014, Women’s Link Worldwide, 2014) and the infantilization of women from southern countries (Doezema, 2004). While victimizing discourse (for women) and criminological discourse gain ground, we are overlooking public authorities’ lack of commitment to guaranteeing protection for all people in human trafficking situation, as well as to ensuring the security of families in the countries of origin in the specific cases where human trafficking is transnational.

Regarding *prevention* in the Comprehensive Plan (2015-2018), *Priority 1* refers to the “reinforcement of prevention and detection of trafficking”, citing 57 actions to be carried out. Although the effectiveness of these actions and the fulfilment of the commitments by implicated administrations have not been evaluated yet, we can mention the ongoing need for specific and updated training

of people working in education, health, social services, justice, media and security forces and bodies, to foster effective early detection of trafficking situations.

In the case of transit countries such as Morocco, a specific law exists against “human trafficking”: Law 27/14. This recent law was approved in 2016, following the speech of King Mohamed VI on Youth Day.

This regulatory framework mainly addresses the situation of girls in domestic worker conditions and the visibility of human trafficking of women coming from countries such as Cameroon and Nigeria. The law rounds up civil society recommendations through a participatory process promoted by the Ministry Responsible for Moroccan Residents Abroad, as well as migration issues in collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). In addition to prosecuting traffickers, a definition of human trafficking is advanced, which includes “convictions and a procedure, in addition to preventive measures that adopt the principle of protecting victims instead of prosecuting them, while condemning the guilty parties and increasing penalties against perpetrators of crimes against children and women.” The project provides protection to victims, witnesses, experts and whistle-blowers” (Art. 82-7) and promotes the creation of a National Commission to Combat THB, presided over by the head of state.

Resources to assist people in human trafficking situation are insufficient, as denounced by the APIS organization in Tetouan (in northern Morocco), which works with groups from countries such as Nigeria, Senegal, Cote d’Ivoire and Cameroon. They do not dispose of instruments to identify human trafficking situations, nor of a road map to accompany vulnerable women who end up prostituting themselves or begging. Lack of resources and sluggish legal processes to obtain victim status generate instability. People are led to re-victimizing themselves to obtain benefits from NGOs operating in the country; people’s complaints are established as a main criterion for admission to the resources they manage (CNDH, 2016).

In the case of Cameroon as a country of origin, law 2011/024 against human trafficking was approved in 2011 and distinguishes between human trafficking, Smuggling and Exploitation. It includes penalties for exercising each separate act but does not mention victims (SPANISH COMMISSION FOR REFUGEES, 2018). Civil society defends the need to extend legal provisions and to include the protection of victims and their families that suffer the consequences of human trafficking. In Cameroon, international trafficking is not visible. At the national level, “internal trafficking” of children takes place from North to East; girls are employed in homes and children in markets. Prostitution is normalized in the context as the result of families’ precariousness, especially women who have left their cities of origin and have travelled to improve their conditions. The fact of emigrating is an individual decision (of the person) or collective decision (the extended family contributes to the completion of the journey).

Cameroon is both a country of origin and transit, but it does not dispose of any regulations regarding the situation of people in transit that require specific attention, nor of the native population looking for migration outlets. A clear example is that of arranged marriages through the Internet where women meet men online and marry to be regrouped in Europe (ALPES, 2014); another case is that of students who take advantage of their studies in Spain or France to stay. The use of “trafficking networks” is a common strategy and the risks involved are accepted. The so-called “returnees”, expelled from European countries, restart the process of saving or seeking help to come back. (ALPE, 2012; FLEISCHER, 2007)

GOOD PRACTICES

- ✓ Read *anti-trafficking* legislation critically.
- ✓ Propose political advocacy measures that guarantee rights for people undergoing human trafficking.
- ✓ Foster public policies that go beyond criminological and victimizing approaches.

7. CHANGE THE WAY WE LOOK AT PEOPLE IN HUMAN TRAFFICKING SITUATION: FROM VICTIMS TO PROTAGONISTS

Regulatory frameworks refer to trafficked women as “victims” or potential “victims of human trafficking”. To this end, indicators have been constructed to establish profiles and their defining features. The recurring use of the term “victim” to refer to exploited people has consequences that deserve to be briefly reviewed. The first consequence is “the passive position” in which they are placed. Starting from the prevailing criminological approach to *human trafficking*, it seems that a victim is that person “who could not decide about his or her fate, who is living a problematic situation because of the fault of a third party” (Peruglia, Reiter & Laffitte, 2013: 10). The “victims of trafficking” (referred to in the 2015-2018 Comprehensive Plan) are women who have faced many obstacles in their countries of origin, during migratory transits and at destination. To accept this position uncritically is to assume the de facto uniqueness of the category and women’s passivity at each stage of the process. We would be defining them based on their needs and shortcomings while omitting their capabilities and resistance.

We consider it more appropriate to refer to *trafficked* people, to break with the statism of the classification of “victim”, understanding that the vulnerability and resistance paradox has an inherent dynamic nature (Butler, 2001) that penetrates the diversity of situations experienced by these women.

A second clear consequence consists in “recovery limitations”. In our specific case, it seems that “female victims of human trafficking” would have “advantages of access to social and health services” (Alcázar & Cabeza, 2017: 90), although, as the women authors keep saying, these advantages turn into disadvantages due to difficulties of protection.

In the case of Spain, the distinction between “detection” of “trafficking victims” by social agents, and “identification”, which can only be carried out by State security forces or bodies, makes it difficult to guarantee protection and rights. The distinction attributes a special identification role to security forces and bodies, although the *Framework Protocol for the Protection of Victims of Trafficking* (2011) refers to the collaboration between social entities and security forces and bodies, as well as to action guidelines for the detection, identification, assistance and protection of “victims of trafficking in human beings”. This reference to social agents’ collaboration, though intended to cushion the harshness of the identification process, has failed to avert distrust:

Fear of authorities not only manifests itself in exceptional cases, it also accompanies any contact with the public and is essentially related to fear of expulsion because of the lack of a residence permit or the discovery of one’s job (Acién, 2014).

The number of victims identified in Spain remains low considering the harsh conditions they have to face. In Spain, they are currently granted a reflection period of 90 days (*Framework Protocol for the Protection of Victims of Trafficking*, 2011). But not only is the latter insufficient to create trust and break the fear of the State’s control mechanisms, it overlooks their reluctance to denounce people who are close to them (relatives, couples, community leaders, etc.) and with which they have built a dual protection/exploitation bond (García, 2017).

A further consequence is continued stigma and denial of agency capacity. The victim category reproduced in political discourses and in social practices contributes to perpetuating the stigma of women in human trafficking situation. We agree with Mansur (2017: 8) that “the establishment of a generic victim status – lacking even a personal history – disregards individuals’ autonomy, turning them into inert beings without agency”. Most discourse by authorities and in public policies projects trafficked women as: “deceived”, “forced” and “coerced”, rendering women’s decision-making abilities invisible throughout the process. An increasing number of studies give voice to these women and allow their abilities to be seen (Flamtermesky, 2014; Jorge, Antolínez & Cordero, 2017). People that suffer trafficking are the major actors of their own lives and as such, their voices and their incentives must guide the entire intervention process, teaching us to drop our “salvation” discourses and our “compensatory” practices”.

GOOD PRACTICES

- ✓ Give a voice to people in human trafficking situation to learn about their needs and use intervention resources according to their requirements.
- ✓ Foster women's abilities based on interactions, pursuing less bureaucratic relationships and increasing trust.

8. DO “SOMETHING” THAT IS LACKING: DE-CONSTRUCT INTERVENTION PRACTICES CONCERNING TRAFFICKED PEOPLE

Strikingly, public policies regarding the care of people in THB situations in the three contexts under study are in fact implemented by civil society because public authorities lack responsibility.

In case of Spain, continuing with the logic they mark political speeches, the intervention to the persons who are in human trafficking situation is orientated principally to the women who are in sexual exploitation. Nevertheless, though in the Integral Plan (2016-2018) the girls are mentioned also, the number of entities, which exist to attend to minors (including the children) in human trafficking situation or at risk, is small and limited.

Despite recognizing that minors constitute a vulnerable population, intervention is difficult because of poor recognition of these situations and a lack of specifically designed political measures. Migrant minors arriving in Spain (Fundación Raíces, 2014) are categorized as UMs (Unaccompanied Minors). Being considered a UM conceals potential *human trafficking*, as no professionals or any specialized resources exist to detect those cases.

To implement practices that guarantee “good treatment” for minors, centres need to be created in Andalusia with specialized personnel. This would avoid relying on the resources of the general protection system. This system is not ready to provide the necessary care, nor does it meet the requirements to administer adequate care required in these very special cases.

In Morocco, minors are in a helpless situation, the child protection system does not guarantee their receipt, attention and accompaniment. This vulnerability leads many minors to attempt to cross the border in search of residential resources, aware of the facilities offered by European countries to UMs. In some cases, family's abandon them knowing that they will be taken care of, as was observed at the Temporary Immigrant Stay Center in Ceuta called CETI.

In the case of Moroccan girls, human trafficking is reflected in the “petite bonne” (little maids) phenomenon, as mentioned earlier. Girls are placed as domestic service workers in homes by intermediaries, usually family members. Civil society has specific programs aimed at preventing and eradicating this

practice. Awareness campaigns are conducted in urban and rural areas to raise awareness among families and other actors on the girls' precarious living conditions, to denounce detected cases and to demand compliance with schooling laws and child labour prohibitions. Entities use the strategy of population empowerment as they regard social and educational action to be the most adequate human trafficking prevention instrument.

In the case of Cameroon, the precarious situation of minors working from a very young age is normalized. Several entities claim that children themselves ask families to send them to work in local markets because of their economic situation. In the south of the country, families leave their children with intermediaries to be employed in other regions in exchange for economic returns. Intermediaries are generally part of their environment, consisting in a close relative or a spiritual leader considered "trustworthy".

In Morocco, women are given special attention because they represent a vulnerable collective; organizations, through International Cooperation projects, have different reception, orientation and support mechanisms in place. Efforts made by entities to offer psychosocial care and humanitarian aid rely on external funding; once aid is withdrawn they have to seek help from volunteers to maintain the support provided.

In Cameroon, hardly any entities deal with trafficked women, because as commented by a number of professionals in humanitarian institutions, it is understood that human trafficking is a risk that women voluntarily undergo as part of their migration to Europe.

Civil society carries out social and educational interventions: on the one hand, awareness campaigns on labour or sexual exploitation are carried out in communities, and on the other, training schemes are offered, such as a professional training programs so they can hold a profession and earn money. In some cases, family and child take part in a common project that implies a joint accompaniment process; in this way, families support initiatives directed towards minors that would also benefit them in the long run.

In Cameroon, some networks combat child labour, human trafficking and work towards human rights. Though they function as a civil society in a coordinated way, they are disconnected from public actors and universities.

In Spain, women are attended by civil society organizations dedicated to exclusion and/or migrant situations. Most Spanish entities organize their interventions aimed at female sexual exploitation "victims" around the following services: receipt, employment orientation, medical, legal, psychological assistance and empowerment training.

The programs' provisional nature, bureaucratization, urgent responses to basic needs and public authorities' scarce commitment are some of the obstacles

faced by professionals. Limited budgets and the lack of a Comprehensive Law that contemplates all trafficking scenarios and potentially affected persons prevent social intervention from providing global responses to people in human trafficking situation:

We need to examine the role played by intervention agents because some practices aimed at social transformation and well-being, sometimes unintentionally include gestures that tend to control populations, individualize social problems and perpetuate inequalities maintaining the status quo (Moreno & Molina, 2018).

Social intervention must aim at accompanying people undergoing THB but without controlling them or violating their decisions. They must also prevent re-victimization processes. Intervention, in the medium and long term, should be determined by “contingencies arising from meetings” (Moreno & Molina, 2018), re-understanding women as agents of their own life projects. Intervention proposals that reproduce biased mandates proper to prevailing policies are doomed to failure because they cannot reproduce the ideologies they defend in everyday life: concrete experiences with women reveal their contradictions.

Discourse and practices of otherness have also defined immigrant women in relation to a certain ideal of female emancipation that is often the model of Western women (Mayorga, 2012: 57).

Moreover, universities must contribute to the progress of human trafficking research, considering the discourses and practices of social agents and the voices and experiences of people undergoing human trafficking as a form of knowledge, based on mutual respect and shared responsibility.

GOOD PRACTICES

- ✓ Deconstruct discourses and practices that use the violation of rights of people undergoing human trafficking to respond to ideological interests aimed at “prosecuting crime” and state control.
- ✓ Include children and other groups as subjects of social intervention.
- ✓ Generate links between the university, public authorities and civil society to advance knowledge of the phenomenon of human trafficking.

9. INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT MUST HAVE A CRITICAL AND COMPREHENSIVE LOOK AT “TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS”.

International cooperation aimed at development has gone through several phases throughout history. At first, it was designed to implement hegemonic development, that is, the concept that appeared in the race for development originating in President Truman's speech (1947). In his speech, the President claimed that there were sufficient resources on the planet to end poverty. This approach created the dichotomy between developed and underdeveloped countries, thus establishing a unique and hegemonic model of development: development as a universal phenomenon.

Thus, international cooperation emerged as the model's main instrument. A structure of international financial and non-financial organizations (Breton Woods, Washington Consensus, etc.) was set up to help countries pursue development, generating debt and establishing financial priorities. This development model created a global gap that, for years, was referred to as North and South.

Major producers of "human trafficking" are located in this very South, in Africa in our case. We can, however, draw parallels with Eastern Europe, Latin America or Asian countries. All these regions remained in the queue of hegemonic development, especially Africa. The concept of development mentalism is not linked merely to economies, it also epitomizes a cultural ideology where anyone, from any country, can affirm whether or not they live in a "developed" country. Naturally, based on this dichotomy, individuals who settle in non-developed regions formulate migratory projects as they aspire to live in regions where the quality of life is linked to a high human development index (HDI).

Migratory flows bring about factors of self-defence within the global system, establishing physical, normative or bureaucratic barriers to the free movement of people. The concept of "trafficking in human beings" emerges from this context.

The lack of opportunities to move freely across different borders, created by the very system that closes the borders, encourages "human trafficking". The *human trafficking* phenomenon cannot be understood without its direct links to the hegemonic development model. Therefore, international cooperation between major international organizations is hardly likely to address the problem from a global perspective.

The Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda, driven by the UNDP and member countries, clearly illustrate this point. Among them, goals 1 (ending poverty) and 5 (gender equality) can be linked to the "human trafficking". These objectives, however, are purely descriptive; they do not establish concrete instruments that enable to question the functioning of the global system. Major innovative international cooperation involving decentralized cooperation linked to NGOs, local municipalities, universities, trade unions and countless organizations comes into play and should be made highly visible.

The Andalusian development cooperation plan, *PACODE* by its Spanish acronym, helps Andalusian entities establish different connections when

working on human trafficking, and thus adopts a broader approach. Our project is part of this framework. The major elements are as follow: reaffirming the need for international cooperation, deepening agent cooperation, and discussing priority issues and fields of action.

The *PACODE* refers precisely to contributing to the defence of human rights and promoting peace and democratic values. “Human Trafficking” is a major component in this field, thus drawing attention to a particularly complex problem.

Furthermore, by adopting decentralized cooperation and organized civil action, we can propose the following initiatives to combat “human trafficking”:

1. *At Destination.* Political incidence: establish processes that uncover people’s difficulties in moving freely mainly due to state and regional public policies. Visibility of people undergoing *trafficking*: the need to dispel clichés and unveil the complexity of the problem.
2. *In transit.* In countries included within migration itineraries, awareness must be raised among civil society and administrative bodies. In the case of Africa, the problem must be given visibility as well as the people in transit to European countries.
3. *In origin.* Support must be given to processes that facilitate territorial self-management, so that migratory projects are born of people’s free choice and not of an imperative need to emigrate.
4. *Globally.* Establish a feminist approach. *Trafficking* cannot be correctly understood if we do not start by recognizing that men and women are unequally affected; establishing spaces of greater vulnerability for women and minors who are exposed to situations of greater hardness and violence (on the road, in the destination, etc.).

Adopting a south/south cooperation approach, articulating networks with national as well as local governments helps to raise awareness among civil society and destination countries, leading to common strategies. Projects establishing local human development in border areas foster coordination between different organizations.

GOOD PRACTICES

- ✓ Analyse *human trafficking* as the consequence of the global hegemonic development model, so that international cooperation may address the structural basis of the problem.
- ✓ Work in countries of origin supporting citizen participation and territorial self-management.
- ✓ Work in destination countries through political advocacy adopting a feminist perspective, thus establishing structural change processes in public policies, especially migration.
- ✓ Generate alliances based on decentralized cooperation and south-south cooperation, such as innovative collaborative initiatives leading to better articulation of the networks that combat «*human trafficking*».

10. TO ADDRESS TRAFFICKING FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE, WE MUST BREAK WITH A UNIQUELY REGULATORY APPROACH.

Studying the concept of *human trafficking* from a classical human rights perspective leads us to regulatory and legal positions. This leads us to recognize that people have the right to move freely across borders. But this perspective does not incorporate values, nor the possibility of implementing processes that facilitate the right to do so, since from this perspective, *trafficking* is essentially approached from a regulatory and legal position. That is, it establishes people as individual and autonomous elements disposing of those rights, without building other insights that are necessary to understand the complexity of human trafficking.

From this point of view, the “other” is understood in a broad sense, and jurists, in the face of this, are mainly concerned with the legal guarantees that give people those rights. That is, from a classical view of human rights, human trafficking focuses on the Right to have rights.

This approach makes it difficult to address human rights and human *trafficking*, since regulations do not allow us to establish which structural elements cause the problem. Human trafficking must be understood comprehensively as a product of multiple historical, economic and regulatory factors.

Therefore, our human rights approach to THB is based on a critical paradigm, understanding that “Human Rights are social, normative, economic and political processes that open or consolidate struggles for human dignity” (Herrera, 2008).

As mentioned above, we must begin by understanding both the conditions of discrimination and their systemic or structural basis. In the case of *trafficking* in human beings, the problem is that of not being able to travel freely across borders, which often causes people, because they have no other option, to make choices that go against their own dignity. Addressing *trafficking* from this paradigm compels us, on the one hand, to

- *Disclose*, and conduct an epistemic analysis of the problem. In this case, territorial diversity must be taken into account. There are many reasons people find themselves in *trafficking* situations in the countries of origin (given they are not homogenous). However, there is a common starting point: human beings' inherent need to change territory and look for places that offer them material and immaterial goods providing human dignity. That is, *trafficking* is another factor linked to migratory processes caused by existing global inequalities, and the difficulty of being able to have access to countries with a high human development index. In the case of Africa, we cannot understand this situation if we do not examine it from a decolonial perspective. The territory was exploited for centuries by external countries that brought about high inequality, as well as serious economic and social problems. In transit countries, the problem is linked to women's and minors' vulnerable situations, especially on the way to destination countries. The major problem, precisely at destination, is the exploitation suffered by people who have managed to reach their destination, due to the debts accumulated to finance their transfer.
- *Destabilize*, by adopting ethical considerations regarding the exploitation of these people. This leads us to request changes to cross-border policies through awareness raising and political advocacy. It is essential to show how trafficking in human beings is linked to other factors such as migration and borders to avoid focusing solely on prostitution and human trafficking. Addressing *trafficking* based on a critical theory of human rights requires us to complexify the concept and uncover nuances.
- *Transform*, by generating political processes that create contexts for human dignity. With an adequate framework, based on people's freedom of movement, we can establish measures that prevent "trafficking networks" and exploitation; a feminist perspective must be maintained, allowing us to implement and remember that women and children are the most vulnerable.

A human rights approach leads us to struggles aimed at making decent lives possible within any territory's own context and culture, following human value criterion and a decolonial feminist position.

GOOD PRACTICES

- ✓ Contextualize human *trafficking* within the global economic model, approaching it as the consequence of current migration processes and flows.
- ✓ Generate processes to fight for the dignity of people affected by *trafficking*, establishing elements of empowerment, especially for the most vulnerable.

**Décalogue de bonnes pratiques d'action sociale avec les femmes migrantes victimes de la traite lors du transit d'Afrique à l'Europe.
Générer le transfert de connaissances entre l'université et les entités sociales**

INTRODUCTION

Le Guide-Décalogue que nous présentons a pour objectif de constituer un support pour les professionnels souhaitant travailler avec de personnes en situation de traite en Andalousie.

Ce guide recueille une partie des doutes et des certitudes forgées à partir d'un processus de réflexion et de dialogue entre professionnels, responsables institutionnels, membres de la société civile, femmes et jeunes, entre l'équipe de travail même, formée par des chercheuses et de chercheurs de l'Université Pablo de Olavide (Séville, Espagne)

En prenant comme référence les apprentissages découlant du projet : *Traite de personnes, santé intégrale et soins : femmes transfrontalières en transit du Maroc vers l'Andalousie* (2014 SEC001), nous nous plantons une nouvelle étude : *Les bonnes pratiques dans l'action sociale auprès de femmes migrantes proches des «réseaux de traite» en transit du Maroc vers l'Andalousie : la promotion de la coopération entre organisations de la société civile, les institutions publiques et les centres universitaires* (2015 SEC011).

Les deux travaux ont été financés par l'*Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement* (AACID).

En partant du cadre épistémologique de la théorie critique des droits de l'homme et des approches décoloniales et féministes, l'objectif du projet a été de créer des espaces de dialogue concernant les pratiques d'intervention sociale destinées aux femmes en situation de *traite*, autant dans leurs pays d'origine (Cameroun) que pendant le transit (Maroc) et dans leur pays de destination (Andalousie).

Nous avons donc décidé de nous pencher sur les trois contextes déjà mentionnés. En Espagne, nous avons sélectionné : Andalousie, Ceuta, Melilla et Madrid ; au Maroc : Tétouan et Tanger ; et Yaoundé au Cameroun. Notre objectif était de connaître les actions que les différentes organisations réalisaient et dialoguer sur le phénomène de la «*traite d'êtres humains*» (TEH) et sur les stratégies qui pourraient contribuer à améliorer l'aide apportée aux personnes en situation de *traite*. D'autre part, nous avons souhaité montrer la réalité des femmes qui traversent les frontières entre l'Afrique et l'Andalousie dans des contextes éducatifs (éducation secondaire et universitaire) pour sensibiliser

et recueillir des propositions d'action que pourraient réaliser les jeunes et les futurs professionnels de l'intervention sociale.

La méthodologie utilisée a été qualitative, basée principalement sur les techniques de participation à travers des groupes de discussion et des ateliers, ce qui nous a permis de réfléchir sur ces points de pair avec les acteurs impliqués.

Le Guide recueille de manière synthétique les apprentissages les plus importants. La manière de l'articuler en dix points permet aux lectrices et aux lecteurs de se faire une idée de la complexité du phénomène de la TEH de façon rapide, ainsi que de faire prendre conscience de la diversité des situations et des personnes qui peuvent en être affectées. Le fait de se pencher sur d'autres contextes révèle un horizon de possibilités permettant la compréhension de ce *phénomène* au-delà des croyances et des stéréotypes de sa propre culture.

À la lumière de chacun des points exposés, nous proposons quelques «bonnes pratiques» qui sont le résultat de nos apprentissages et qui ont comme prétention de servir d'orientation pour les actions d'intervention sociale. Ces «bonnes pratiques» sont des propositions ouvertes qui seront enrichies par la praxis d'une réalité dynamique et en changement. Les espaces de rencontre entre université, éducation secondaire et entités sociales ont permis de créer des espaces permettant de construire de nouveaux liens facilitant l'apprentissage et la responsabilité partagée.

Depuis notre position épistémologique, nous souhaitons que le produit de ce travail ait pour but de transformer et de questionner les logiques hégémoniques. Nous essayons d'aller plus loin que les questionnements simplistes du phénomène qui mènent à la reproduction de pratiques orientées vers la réponse de besoins plus que vers l'apprentissage des processus de résistance.

Pour finir, nous souhaitons remercier toutes les institutions qui nous ont ouvert leurs portes pour partager leurs apprentissages, à toutes les personnes qui ont voulu participer à ce processus de dialogue. Nous souhaitons également remercier ceux qui nous ont fourni des informations sur les contextes étudiés et, surtout, les femmes qui ont bien voulu nous raconter leurs expériences lors des ateliers. Sans elles, ce travail n'aurait pas été possible.

Merci.

L'équipe de recherche.

1. IL EST NÉCESSAIRE DE PROBLÉMATISER LE CONCEPT DE «TRAITE D'ÊTRES HUMAINS» (TEH) : AU-DELÀ DU PROTOCOLE DE PALERME

Depuis les débuts du XXI^e siècle, un soin tout particulier a été apporté à l'introduction dans les programmes politiques du phénomène de «Traite d'Êtres Humains». Un indicateur clair de l'intérêt pour ce sujet a été la mise en œuvre par les Nations Unies du *Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants* (2000), connu comme Protocole de Palerme.

Le Protocole conceptualise la *traite* de personnes comme «*le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation.*» (Protocole de Palerme 2000 : Art. 3).

Depuis les années 2000 et jusqu'à nos jours, toutes les actions pour combattre la *traite*, menées autant par les États que par la société civile, ont recours à cette définition sans se rendre compte que nous sommes face à un concept analytique et politique utilisé par les Nations Unies. Actuellement, cela semble peu viable de le répliquer littéralement dans les pratiques sociales. L'accepter tel quel comporte le risque d'affronter le phénomène de la *traite* depuis un point de vue réductionniste et abstrait, dont la conséquence la plus immédiate serait la généralisation d'un concept intangible de *traite* auquel on essaierait d'ajuster la réalité des personnes.

Après environ deux décennies, il est nécessaire de repenser le concept de *traite* dans l'objectif de créer des stratégies d'intervention sociale qui prennent en compte la complexité du phénomène. Cette complexité nécessite d'élargir la conceptualisation dans au moins trois directions :

a. Envisager la TEH comme un phénomène socio-historique

Le concept de *traite* est relativement récent bien qu'il semble être, seulement, une nouvelle forme de nommer l'exploitation humaine qui prend ses racines historiques dans le colonialisme. L'expansion de l'eurocentrisme apporté

par la modernité et le libéralisme économique, et exporté aux quatre coins du globe, a provoqué la généralisation de ces pratiques.

Sur notre planète actuelle mondialisée, ce phénomène s'est étendu et le nombre de personnes affectées est en augmentation. Selon les principaux rapports internationaux, les bénéfices économiques générés par la TEH se situent parmi les trois secteurs les plus lucratifs au monde, au même titre que le trafic d'armes et le trafic de personnes. Ces activités forment une triade qui s'étend grâce aux profits que génèrent les pouvoirs factuels.

b. Actualiser le concept de TEH

Actualiser signifie incorporer de nouveaux éléments. Ils sont nécessaires pour analyser la réalité de la TEH depuis ses différentes formes et finalités, et incorporer du dynamisme dans la perception des situations.

Des perspectives comme celle de l'herméneutique diatopique (Panikar : 2007) essaie de chercher des espaces communs pour le dialogue sans supposer que les «autres» ont les mêmes connaissances et expériences que «nous». L'incorporation de cette perspective remet en question la conceptualisation de traite donnée par le *Protocole de Palerme qui doit, sans aucun doute, être enrichi par l'apport d'autres cultures*.

Les actualisations qui proviennent de perspectives comme celle-ci se présentent comme une possibilité pour rompre avec le dualisme cartésien qui simplifie notre manière de connaître le monde et, également, avec l'étatisme qui mène à la reproduction acritique du concept dans la praxis.

c. Connaissance empirique de la réalité

Il est nécessaire d'avoir une connaissance de la TEH émergeant des contextes où sont situés les personnes et les collectifs, en complément de la connaissance générale offerte par les données statistiques et les évaluations quantitatives du phénomène. «Le contexte concernant l'objet d'étude pointe l'ensemble complexe de phénomènes ou de conditions qui mettent en relation et forment l'environnement des objets de l'analyse» (Nohlen, 2011 : 4).

Incorporer les contextes dans la connaissance de la TEH suppose prendre en compte des interactions subjectives et narratives qui surgissent dans chaque situation concrète. Ignorer cette forme de rapprochement à la réalité est ce que De Sousa Santos (2009) dénomme «le gaspillage des expériences».

Le concept de TEH qui est proposé par le Protocole doit être remis en question pour désapprendre la logique hégémonique et euro-centrique (Restrepro et Escobar, 2004) dont il est imprégné et apprendre à incorporer les

interactions, les processus et les expériences. Cette forme de connaissance nous mènera à une forme de conceptualisation provenant de la raison expérimentale, concrète, qui apprend de l'histoire et du dialogue et qui permet de partir du particulier pour aller vers le général en ce qui concerne la TEH.

BONNES PRATIQUES

- ✓ Aller plus loin que la reproduction acritique du concept de TEH dans les pratiques d'intervention sociale.
- ✓ Compléter la connaissance des données statistiques grâce à une connaissance située se basant sur la praxis.

2. IL FAUT PRENDRE EN COMPTE LA TRAITE DEPUIS LA DIVERSITÉ TERRITORIALE

La définition de *traite* du Protocole de Palerme est conditionnée par le contexte dans lequel elle est débattue et approuvée : la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Ce n'est donc pas un instrument conçu pour défendre les droits de l'homme et protéger les victimes du délit, mais un outil facilitant la coopération dans le but de combattre le crime organisé (Anderson et Andrijasevic, 2008). Son approbation est étroitement liée à l'arrivée croissante de migrants dans les pays occidentaux et au contrôle des frontières. Cela expliquerait que, malgré le fait que beaucoup d'États aient formellement adhéré à ce document et ont accepté cette interprétation du terme *traite*, son application varie fortement selon, entre autres, l'importance que chaque nation donne à la pénalisation des flux migratoires. Plus l'intérêt de réguler le transit de personnes est grand, plus on donne d'importance à «la traite d'êtres humains». Ainsi, habituellement pour les pays d'origine, émetteurs de migrants, la *traite* n'est pas considérée comme un sujet pertinent jusqu'à ce que les pays occidentaux fassent pression pour qu'ils contrôlent leurs frontières.

Ce n'est pas seulement l'intérêt politique plus ou moins grand et la prise de conscience sociale de la traite de personnes qui changent d'un pays à un autre mais également la manière dont on la comprend et les collectifs affectés dont s'occupent les institutions. Si nous comparons les politiques et les règlementations sur la traite et leur application dans différents États, nous pouvons constater que malgré le fait qu'ils se basent sur le même concept, leur interprétation diffère considérablement et prend des significations différentes.

En Espagne, comme dans presque toute l'Europe, la visibilité de la *traite* a augmenté au fur et à mesure qu'a augmenté la pression migratoire. L'intérêt général se centre, de manière presque exclusive, sur l'exploitation sexuelle des

femmes, à tel point que la *traite* est désormais associée à ce type de délit. Des informations apparaissent de plus en plus fréquemment sur cette question dans les médias. Par contre, on y fait très peu référence à d'autres formes d'exploitation. Curieusement, cette apparente préoccupation sociale contraste avec le fait qu'il n'existe aucune loi sur la *traite*. Les mesures qui sont prises sont principalement policières. Les politiques *anti-traite* apparaissent étroitement liées aux politiques migratoires, convertissant les campagnes *anti-traite* en campagnes *anti-immigration* (Nieuwenhuys, 2007).

La situation de la «traite des êtres humains» est très différente au Maroc, un pays d'émigration, où l'arrivée de population africaine en chemin pour l'Europe a supposé l'émergence d'un phénomène inconnue jusque-là : l'immigration. La politique de l'Union Européenne va encourager le Maroc à devenir une digue de retenue de la frontière sud de l'Europe et ce sera à ce moment-là que la question va apparaître dans l'agenda politique de ce pays.

La faible prise de conscience sociale au Maroc sur ce sujet contraste avec le fait qu'il existe une loi de *traite*, alors qu'elle est absente dans beaucoup d'États européens. Cependant, dans ce pays nord-africain, la *traite* de personnes est perçue de manière très différente qu'en Europe. En premier lieu, cette loi ne s'est pas focalisée sur l'exploitation sexuelle des femmes. Le fait qu'il y ait au Maroc une reconnaissance officielle de l'existence de la prostitution a contribué à ce que cette dernière ne soit pas le point de mire de la législation. Il faut également noter que la législation marocaine qui régule la *traite* prend en compte une réalité ignorée en Europe : l'exploitation de mineurs à l'intérieur du pays, particulièrement les filles travaillant dans le service domestique, ce qu'on appelle là-bas les *petites bonnes*. Ce sont des mineures, qui proviennent souvent de milieux ruraux et qui sont utilisées, parfois par leur propre famille, comme employées de maison (Ajaaouani, 2013), travaillant quotidiennement dans des situations d'isolement, avec des salaires de misère, abusées verbalement, physiquement... Et sans accès à l'éducation (Llorent, 2013).

La situation est encore plus complexe au Cameroun, d'où émigrent des milliers d'hommes et de femmes en chemin pour l'Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis. Comme dans d'autres pays africains, il existe une loi de 2001 contre la *traite* et la contrebande de personnes, et un comité interministériel de lutte contre ce délit qui, normalement, prend en compte l'application de diverses mesures pour la protection et la réhabilitation des femmes et des filles en situation de *traite*. Cependant, ces lois ne s'appliquent pas, entre autres raisons, par manque de moyens (COMMISSION ESPAGNOLE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS, 2018)

En regardant la législation, il pourrait sembler qu'il existe au Cameroun une forte prise de conscience de la *traite*, mais tout semble indiquer que ces dispositions répondent plus à une question d'image que de préoccupation réelle. L'exploitation sexuelle des Camerounaises, à l'intérieur du pays ou en

dehors, n'est pas perçue comme un problème mais comme la conséquence de la prise de décision des personnes. La *traite* de femmes provenant d'autres pays africains ne semble pas non plus trop choquer les consciences, car en plus d'être un pays d'origine de migrants, le Cameroun est aussi un pays de transit. Cependant, l'intérêt est concentré sur d'autres modalités de la *traite* : l'exploitation économique des Camerounais et des Camerounaises dans les pays du Golfe, ainsi que l'exploitation interne de milliers de mineurs provenant des zones rurales, particulièrement de la zone nord (Kah, 2016). Les familles les plus pauvres cèdent leurs enfants à des familles avec une meilleure situation économique et ces dernières les exploitent professionnellement dans tous les secteurs économiques.

Le concept de *traite*, tel qu'il est considéré en Europe, est difficilement transposable dans les pays africains, qui font face à de nombreux problèmes et dont une part de la population a le regard tourné vers l'émigration. Ces différences soulignent que le regard sur la *traite* des pays occidentaux est ethnocentrique et ne tient pas en compte de la variabilité territoriale du problème.

BONNES PRATIQUES

- ✓ Il est nécessaire de considérer la *traite*, depuis l'optique des pays de transit et d'origine et non seulement depuis l'Europe.

3. RECONNAÎTRE LA VARIABILITÉ CULTURELLE DES FEMMES EN SITUATION DE TRAITE

Un nombre très important de femmes qui sont en situation de *traite* dans les pays européens viennent d'Afrique. Les rapports, autant des organismes internationaux que des ONG, sont unanimes sur ce phénomène et soulignent que le Nigeria, le pays africain le plus peuplé, est le principal point de départ de femmes vers l'Europe. La présence majoritaire de Nigériaines dans les réseaux européens de prostitution ont fait d'elles la face la plus visible de ce phénomène, le prototype de «victime» de *traite*, par métonymie de la *traite* africaine. Pour cette raison, beaucoup de femmes d'Afrique ou d'Europe sont qualifiées à tort de nigérianes ou sont considérées comme si elles venaient réellement de ce pays. Toutefois, si nous regardons les données disponibles, nous nous apercevons que les femmes africaines *traitées* viennent de pays très différents, autant du nord du continent que de la zone centrale et occidentale.

Si on réduit parfois le collectif de femmes africaines, en les assimilant aux Nigériaines, il est encore plus fréquent qu'elles soient englobées sous le qualificatif de *subsahariennes*, une dénomination qui, comme le signale l'historien

et le politologue nigérian Herbert Ekwe-Ekwe, au-delà de sa signification géographique, utilisé pour situer les pays localisés au sud du Sahara, est le fruit d'une vision colonialiste de l'Afrique :

L'«Afrique subsaharienne», est sans aucun doute un symbole géopolitique et raciste et ceux qui l'utilisent souhaitent représenter, encore et toujours, l'imaginaire de la désolation, de l'aridité et du désespoir du milieu désertique (Ekwe-Ekwe, 2010).

Qu'elles soient classées de manière simplificatrice comme nigérianes ou de manière générale comme subsahariennes, ces qualificatifs servent à homogénéiser, par la couleur de peau et la pauvreté, ces femmes qui migrent vers l'Europe, en occultant leur diversité. L'Afrique est un continent varié et les femmes qui en proviennent sont le reflet de cette pluralité, étant donné qu'elles ne viennent pas seulement de pays distincts, mais également de contextes politiques, économiques et culturels très différents. La plupart des États africains sont un reflet de cette variété, il suffit d'analyser un pays comme le Nigeria pour constater son énorme complexité culturelle : plus de cinquante langues, de nombreux groupes ethniques... Il est vrai que les Nigérianes qui arrivent en Espagne proviennent majoritairement de l'État d'Edo et d'une même ville, Benin City, ou de villes des alentours. Toutefois, on retrouve également des femmes des zones rurales du nord et d'autres endroits du pays avec des langues, des religions et des circonstances personnelles diverses. Un autre État africain, le Cameroun, d'où proviennent un nombre croissant de femmes en situation de *traite* et bien que plus petit et avec une population bien moins nombreuse, montre la même diversité ethnique, linguistique, religieuse... qui se va se refléter dans les projets migratoires des femmes de ce pays. La zone nord et sud du Cameroun anglophone, avec une majorité de population musulmane, présente des circonstances économiques plus précaires, une grande instabilité politique et une violence institutionnelle plus importante. Les femmes des régions anglophones et francophones du Cameroun diffèrent sur les stratégies d'émigration : elles n'utilisent pas les mêmes canaux pour arriver en Europe et choisissent des pays de destination différents. (ALPES, 2012 y 2013)

Étant donné cette grande variabilité, il semble erroné de se référer aux femmes en situation de *traite* comme un collectif unique. Ils varient en fonction de l'âge, de l'origine, de l'éthnie, de la religion, du niveau éducatif... (Brenn, 2005). Il est vrai qu'il est possible de généraliser, mais pas de dessiner une sorte de portrait-robot basé sur un regard ethnocentrique qui les perçoit comme pauvres, analphabètes, superstitieuses, dépendantes... Enclines à être trompées et sans capacité d'action. Dans les médias et dans quelques rapports, on peut trouver la marque de ce cliché. Dans ce sens, c'est devenu un lieu commun d'affirmer que les «subsahariennes» en situation de *traite* sont fréquemment contrôlées par la religion. Il peut être vrai que de nombreuses femmes nigérianes sont menacées

par l'usage de la magie, du voudou, de ce qu'on appelle le «*juju*» dans le but d'être exploitées, mais il ne faut pas oublier que ces idées ne sont pas inhérentes à l'Afrique. Dans les ateliers réalisés à Yaoundé (Cameroun), nous avons pu constater que ces croyances ne sont pas partagées par toutes les migrantes africaines. Le contexte économique, le niveau d'éducation, la religion etc. sont extrêmement variables, même à l'intérieur d'un pays.

Reconnaitre la diversité des femmes qui sont en Europe en situation de *traite* est une étape nécessaire, en premier lieu, pour surmonter le regard victimisateur mais aussi pour comprendre leurs circonstances et leur offrir le soutien nécessaire. Ces personnes ne viennent pas seulement de cultures et de contextes sociopolitiques hétérogènes, elles possèdent des expériences migratoires distinctes que les poussent à avoir une perception très différente de leur réalité, ce qui exige une attention individualisée et sans application de stéréotypes.

BONNES PRATIQUES

- ✓ Sensibiliser les professionnels liés à la *traite* sur l'importance de la diversité culturelle dans le travail avec les femmes en situation de *traite*.
- ✓ Écouter les voix de ces femmes, en évitant d'appliquer des stéréotypes.

4. LA TRAITE, UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE : CE N'EST PAS SEULEMENT LA PROSTITUTION, NI L'IMMIGRATION ILLÉGALE

Un élément clé dans la définition de *traite* du Protocole de Palerme est celle d'*exploitation des personnes* qui est envisagée dans un sens global. Toutefois, l'allusion claire qui est faite dans ce document à «l'exploitation sexuelle» de femmes et d'enfants, et la dénommée «exploitation de la prostitution d'autrui» a concentré toute l'attention dans cette direction, simplifiant ce phénomène à tel point que la *traite* a fini par être identifiée de manière exclusive à ce type d'exploitation.

Le fait que le Protocole de Palerme n'ait pas défini de manière précise «exploitation», ni d'autres concepts comme «exploitation de la prostitution d'autrui», « vulnérabilité» ou «coercition», a contribué à créer une certaine confusion (Anderson y O'Connell Davidson, 2002) qui a fini par transformer le mot *traite* en synonyme de prostitution, une idée renforcée par les positions abolitionnistes face au commerce du sexe, qui le considère toujours comme une forme d'exploitation ou d'esclavage, sans faire la distinction entre la prostitution «forcée» et le «libre choix» (Anderson y Andrijasevic, 2008). Cette dissimulation explique le fait qu'actuellement, dans n'importe quel débat qui tourne autour

de la traite, il est inévitable qu'apparaisse automatiquement la question du commerce du sexe.

Sans nier qu'il existe un lien étroit entre *traite* et prostitution, nous devons tenir en compte qu'elles ne sont pas toujours associées, et ne pas les distinguer semble peu constructif pour comprendre ce phénomène dans toute son amplitude et contribue de plus à la victimisation et à la stigmatisation de beaucoup de femmes. Une autre des conséquences directes de ce manque de clarté est l'occultation d'autres formes de *traite* : exploitation économique, trafic d'organes... Un secteur qui semble aussi éloigné de la prostitution que du service domestique est un contexte habituel de *traite* dans le monde entier (Lindio-McGovern, L, 2003; Craig; Gaus; Wilkinson; Skrivankova ; McQuade, 2007) et il ne déclenche pourtant pas la même alarme sociale.

Il faut situer la rédaction du Protocole de Palerme dans le contexte de préoccupation des Nations-Unis concernant le contrôle des frontières avec l'objectif d'enrayer la criminalité internationale. Cette circonstance va profondément marquer la définition qu'on a donnée à la *traite*, qu'on lie étroitement au transport transnational de personnes. Ce fait a abouti à la confusion entre *trafic* et *traite* de personnes, deux concepts qui ont fini par être comparés dans la pratique à «l'émigration illégale».

Le rejet social unanime concernant la *traite* permet, avec le prétexte de la combattre, de criminaliser l'immigration, encourageant des attitudes xénophobes et durcissant les politiques migratoires, à une époque de féminisation des migrations où à la différence du passé beaucoup de femmes se déplacent seules, favorisant les mesures répressives et provocant un manque de débat politique et social sur ce sujet.

Nous ne pouvons pas perdre de vue que pour que la *traite* existe il n'y a pas besoin de traverser de frontières, puisqu'elle peut se produire également ici, à l'intérieur même d'un pays, c'est ce qu'on appelle la *traite interne*, qui est rarement prise en compte. Il est paradoxal de renvoyer dans leurs pays d'origine des femmes en situation de *traite* pour les «protéger», en ignorant qu'elles peuvent y être exactement dans la même situation.

La *traite* quand elle comporte la traversée de frontières ne signifie pas non plus que l'immigration est illégale, puisque les travailleurs et les travailleuses qui se déplacement légalement et qui travaillent même dans l'économie formelle peuvent être soumis à des situations de grande vulnérabilité et subir des menaces, de la violence physique, un non versement des salaires, la confiscation de passeport... (Anderson y Rogaly 2005; Calavita 2004).

BONNES PRATIQUES

- ✓ Différencier la prostitution et la *traite*, en évitant de cette manière de criminaliser les femmes qui se dédient à cette activité, les condamnant à de plus mauvaises conditions de vie.
- ✓ Considérer la *traite* au sens large, en prenant en compte qu'elle affecte tous types de population et qu'elle présente de multiples facettes dont l'exploitation sexuelle n'est que la plus frappante.

5. ON NE PEUT PAS DISSOCIER LA TRAITE DES POLITIQUES MIGRATOIRES.

L'Organisation Internationale des Migrations (OIM) estime qu'il y a 244 millions migrants internationaux sur toute la planète, ce qui équivaut à 3,3 % de la population mondiale. Il est important de souligner que la grande majorité des personnes ne traversent pas une frontière quand ils migrent. Il est beaucoup plus fréquent qu'elles se déplacent à l'intérieur du même pays. Selon les estimations du PNUD, en 2009 il existait 740 millions de migrants internes.

La migration est un phénomène qui affecte le monde entier de manière très diverse, selon la situation géopolitique des pays d'origine. Les moyens et les outils utilisés dans ce processus sont liés aux éléments propres au contexte.

La TEH implique le déplacement et le mouvement à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, les moyens utilisés pouvant être la contrainte ou la menace. Les politiques migratoires restrictives ont généré une situation de vide au sein duquel les collectifs vulnérables se retrouvent sans protection face aux États. La répression a été la réponse des autorités frontalières et locales dans les pays de transit et de destination pour freiner les flux migratoires. Le durcissement des politiques publiques a laissé beaucoup de personnes dans la vulnérabilité la plus extrême face à l'inaccessibilité aux droits fondamentaux des êtres humains.

Face à cette situation, nous considérons la connexion qui existe entre «*traite des êtres humains*» et *migration*. Premièrement, par la relation qui découle du mouvement de population vers un autre État ou à l'intérieur de celui-ci, comme cela est repris dans la définition de *traite* du Protocole de Palerme et deuxièmement, par les outils et les moyens utilisés pour la migration.

Les stratégies des migrants en réponse aux politiques publiques restrictives sur les migrations ont été très diverses. D'un côté, au niveau individuel, beaucoup de personnes utilisent les «réseaux de *traite*» comme une plateforme pour sortir de leur pays et arriver en Europe. Parfois, ils contactent lors du transit depuis le pays d'origine vers le pays de destination ces réseaux à la recherche de protection pour réaliser le trajet qui leur est refusé par les États.

Au niveau collectif, les groupes de personnes qui abandonnent leur pays à la recherche d'une meilleure vie se retrouvent face à une barrière institutionnelle et certaines politiques migratoires dures qui représentent un acteur clé dans la violence institutionnelle normalisée dans les zones frontalières de Ceuta et de Melilla.

Selon le contexte, ils utilisent certains moyens ou d'autres pour le déplacement de migrants. Depuis les pays occidentaux, cette situation est analysée sans tenir en compte que la *traite* présente des particularités en fonction des territoires, des priorités des pays et surtout, de la population affectée. La manière d'entreprendre le voyage est parfois une décision individuelle, et d'autres fois, collective.

Dans le cas du Maroc, il existe un mouvement migratoire liée à l'exode rural, des familles qui se déplacent de la campagne à la ville et cèdent leurs filles à un intermédiaire pour qu'il lui trouve un travail comme employée de maison. Vers l'Europe, ce flux est plus réduit et affecte plus les mineurs non accompagnés (MNA) et les hommes. Cependant, il se produit un grand mouvement de femmes vers les pays d'Orient qui sont fréquemment dans une situation de *traite*. Au niveau national, on rend plus visible les filles exploitées comme employées de maison que les femmes qui sont l'objet de *traite* au niveau international. De même, plus de visibilité est donnée aux femmes *traitées* provenant d'autres pays africains qu'aux Marocaines qui sont exploitées dans les pays du Golfe, malgré le fait qu'au Maroc, la loi 27/14 contre «la traite d'êtres humains» protège les femmes quelle que soit leur nationalité. Les immigrantes qui n'ont pas été «victimes de traite» sont expulsées et elles sont conscientes de ce fait, tout comme «les réseaux de traite».

Dans le cas du Cameroun, *traite* et migration vont de pair. Pour des milliers de personnes, la traite est une stratégie de migration, un des moyens de sortir du pays, c'est pour cette raison qu'elle n'est pas criminalisée, elle est vue comme la conséquence d'un choix, parfois individuel et parfois familial.

Comme conclusion, nous pouvons affirmer que la création d'organismes spéciaux, comme la FRONTEX et les dispositifs de répression, ouvre le débat sur les manières dont ces mesures affectent la transformation du phénomène migratoire en un processus de *traite*, processus servant de moyen pour arriver à une fin. La répression existante et les reconduites à la frontière ont poussé les migrants à chercher des stratégies qui sont légalement solides dans le pays d'entrée afin d'atteindre leur objectif. Les alliances transnationales se concentrent plus sur la répression que sur la protection des personnes vulnérables. On ne se concentre pas sur les personnes mais sur les circonstances ou les moyens de mouvement.

Les acteurs de la société civile dénoncent les campagnes contre la *traite* qui sont utilisées comme un moyen de lutter contre la migration, sonnant l'alarme sociale et révélant les phénomènes qui découlent de ce phénomène.

Depuis les pays d'origine, un travail complexe de prise de conscience sociale est effectué sur les carences de la population migrante et des personnes qui tombent dans les «réseaux de traite».

BONNES PRATIQUES

- ✓ Prendre en compte le lien qui existe entre *traite* et migration.
- ✓ Promouvoir des campagnes d'information sur la migration et la *traite*, mettant en avant les liens et les conséquences découlant des deux concepts selon le contexte.
- ✓ Sensibiliser sur l'utilisation politique de la *traite* pour justifier la mise en œuvre de politiques migratoires toujours plus restrictives et criminalisantes.

6. PRENDRE CONSCIENCE DE CE QU'IL RESTE À FAIRE CADRES DE RÉGULATION DE LA TEH

Nous partons de ce que disent les cadres régulateurs de la TEH qui prennent comme référence principale le Protocole de Palerme mentionné. Bien que dans le Protocole, il est mentionné dans l'article 2 que la finalité est triple : «*Prévenir, protéger et promouvoir la collaboration entre les États*», les développements législatifs ont mis la priorité sur la pénalisation du délit plutôt que sur les garanties de protection et le développement de mesures préventives. En 2010, les Nations Unies ont adopté le *Plan d'Action Mondial contre la traite de personnes* (Résolution 64/293) où il est explicitement dit qu'il sert, entre autres, à aider les États Membres à renforcer leurs engagements politiques et leurs obligations juridiques visant à prévenir la traite de personnes.

Focalisant l'attention sur le milieu européen, le point de départ pour l'application des mandats du Protocole est la *Convention du Conseil d'Europe sur la Lutte Contre la Traite d'Êtres Humains* (2005), aussi connu comme la Convention de Varsovie. La plupart des États qui l'ont ratifiée ont principalement dédié leurs stratégies de réglementation à la *persécution* du délit plutôt qu'à la *protection* et à la *prévention*. Celles-ci répondent à une logique punitive qui a pour finalité directe la criminalisation des migrations (Cordero, 2014). «Au moins au sein de l'Union Européenne, l'État légitime et nourrit les phobies sociales, en faisant le lien entre les concepts de migration, de délinquance et de TEH». (Juliano 2005: 90)

Dans le cas concret de l'Espagne, il n'existe pas de réglementation spécifique sur la TEH et sa régulation se fait par le Code Pénal (article 177 bis) et les modifications de la législation relative au statut des étrangers (LOEX 2011), consolidant clairement l'intérêt de *poursuite* des délits. Deux Plans Complets concernant la *protection* ont été engagés, seules tentatives de réponse du gouvernement espagnol aux engagements pris par la ratification de la *Convention européenne sur la Lutte Contre la Traite*. En 2008, le premier *Plan Complet d'Action contre la traite d'êtres humains dans le but de l'exploitation sexuelle* (2009-2012) a été lancé, et en 2015 a démarré le second *Plan Complet de Lutte contre la traite de femmes et d'enfants dans le but de l'exploitation sexuelle* (2015-2018). Dans le second plan, on peut noter des avancées sur certaines questions concrètes comme : le rallongement de la période de rétablissement et de réflexion, qui passe de 30 à 90 jours, la possibilité d'existence de «traite interne», des aspects spécifiques qui améliorent la protection des mineurs sont mentionnés... Toutefois, les deux plans ont des limitations claires comme celles de se concentrer seulement sur les femmes et les filles victimes d'exploitation sexuelle, laissant de côté d'autres finalités de la *traite* et d'autres personnes et collectifs affectés.

Cette assimilation entre TEH et prostitution de la part des politiques publiques, courante en Espagne, a des conséquences nuisibles autant sur les femmes qui se prostituent que sur celles qui se trouvent en situation de *traite*. Un exemple est la réforme apportée en 2015 par la loi de sécurité citoyenne (*Ley de Seguridad Ciudadana*) où d'après le principe de la sécurité citoyenne, on sanctionne l'offre et la demande de services sexuels dans l'espace public (sans distinguer le fait que la prostitution s'effectue de manière libre ou forcée). Cette mesure permet de sanctionner les personnes qui sont en situation de TEH, ne respectant donc pas les accords de protection des victimes, obtenus par la ratification de la Convention de Varsovie, et provocant le déplacement de la prostitution dans des lieux plus périphériques plaçant les femmes dans une vulnérabilité encore plus forte.

Quant aux mesures de protection qui ont été adoptées par l'État espagnol, on peut affirmer qu'elles sont assez limitées étant donné que pour garantir sa protection, une personne qui se trouve en situation de TEH doit être considérée comme victime. Les cadres de régulation défendent une conception de victime de *traite* qui est au final abstraite, une conception qui ne coïncide pas toujours aux situations concrètes vécues par les personnes. Cette conception tend à se perpétuer à travers les pratiques sociales, ce qui risque de contribuer à la revictimisation des femmes (Flamtermesky, 2014; Women's Link Worldwide, 2014) et à l'infantilisation des femmes provenant des pays du Sud (Doezema, 2004).

Lorsqu'on met l'accent sur le discours victimisant (pour les femmes) et criminalisant, on ne laisse pas de place à la reconnaissance de manque d'engagement des pouvoirs publics pour garantir la protection de toutes les

personnes qui se trouvent en situation de TEH et dans les cas spécifiques de la TEH transnationale, pour garantir également la sécurité des familles dans les pays d'origine.

Quant à la *prévention* dans le Plan Complet (2015-2018), il est fait référence dans la *Priorité 1* au «renforcement de la prévention et de la détection de la *traite*» en mentionnant 57 actions à réaliser. Bien que l'efficacité de ces actions et la réalisation des engagements de la part des différentes administrations impliquées n'aient pas encore été évaluées, on peut d'ores et déjà affirmer qu'il est toujours nécessaire de former de manière spécifique et continue les personnes travaillant dans l'éducation, la santé, les services sociaux, la justice, les médias et les forces de l'ordre, dans l'objectif de pouvoir promouvoir des actions efficaces servant à favoriser la détection précoce des situations de *traite*.

Dans le cas des pays de transit comme le Maroc, il existe une loi spécifique contre la «traite d'êtres humains», la Loi 27/14. Cette loi est récente, elle a été adoptée en 2016, plus concrètement après le discours du Roi Mohammed VI dans le cadre de la journée de la jeunesse.

Ce cadre réglementaire tente principalement de répondre à la situation des filles qui travaillent comme aide domestique et à donner de la visibilité à des situations de TEH des femmes provenant de pays comme le Cameroun, le Nigeria... Cette loi recueille les recommandations de la société civile grâce à un processus participatif lancé par le Ministère Chargé des Marocains Résidents à l'Étranger, ainsi que des problèmes de la migration avec la collaboration de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC). À part poursuivre les exploiteurs, une définition de la TEH est donnée et inclut «des condamnations et une procédure, en plus de mesures préventives qui adoptent le principe de protection des victimes au lieu d'engager des poursuites, tout en condamnant les coupables et en augmentant les peines contre les auteurs de délits contre les enfants et les femmes». Le projet offre une protection aux victimes, aux témoins, aux experts et aux plaignants» (Art. 82-7) et promeut la création d'une Commission Nationale de Lutte contre la TEH présidée par le chef de l'Etat.

Les moyens pour l'assistance des personnes en situation de TEH, comme cela est dénoncé par l'organisation APIS de Tétouan (dans le nord du Maroc) qui travaille avec des collectifs provenant de pays comme le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ne disposent pas d'outils pour identifier les situations de TEH ni de feuille de route pour accompagner les femmes en situation de vulnérabilité qui finissent par se prostituer ou mendier. Le manque de moyens et la lenteur des procédures légales pour obtenir le statut de victime génèrent une situation d'instabilité qui pousse les personnes à se victimiser à nouveau pour obtenir des aides auprès des ONG qui opèrent dans le pays et établissent dans

leurs paramètres d'accueil la plainte de la personne comme principale critère d'admission aux ressources qu'ils gèrent, CNDH (2016).

Dans le cas du Cameroun comme pays d'origine, il existe également la loi 2011/024 contre la TEH adoptée en 2011. Dans ce texte de loi, la TEH, le Trafic et l'Exploitation sont clairement distingués, les peines correspondantes à chacune de ces activités sont listées mais aucune mention n'est faite des victimes. (COMMISSION ESPAGNOLE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS, 2018)

La société civile défend la nécessité d'élargir les dispositions légales, d'inclure la protection des victimes et de leurs familles qui subissent les conséquences de la situation de TEH. Au Cameroun, la *traite* internationale n'est pas visible, il existe au niveau national une «*traite interne*» du nord à l'est d'enfants, les filles étant employées de maison et les garçons travaillant sur les marchés. Pour ce qui concerne la prostitution, elle est normalisée dans le contexte en tant que conséquence de la précarité dans laquelle vivent les familles, particulièrement les femmes qui ont quitté leur ville d'origine et se sont déplacées pour améliorer leur condition. Le fait d'émigrer semble plus une décision individuelle (de la personne) ou collective (la famille au sens large contribue à la réalisation du trajet).

Le Cameroun est autant un pays d'origine que de passage, mais il ne dispose pas d'une réglementation de régulation concernant la situation de personnes en transit qui nécessitent une assistance spécifique, ni de la population autochtone à la recherche de débouchés migratoires. Un exemple clair est celui des mariages arrangés sur internet où des femmes connaissent des hommes sur le Net et se marient afin d'arriver en Europe sous couvert de regroupement familial (ALPES, 2014) Un autre cas est celui des étudiants qui profitent de leur séjour d'études en France ou en Espagne pour y rester. L'utilisation des «réseaux de traite» est une stratégie communément acceptée, avec tous les risques que cela suppose. Les personnes qu'on appelle les «reconduits», expulsés des pays européens, recommencent le processus d'épargne ou de recherche d'aide pour retenter le trajet (ALPE., 2012; FLEISCHER, 2007)

BONNE PRATIQUE

- ✓ Avoir une lecture critique de la législation *antitraite*.
- ✓ Proposer des mesures d'application politique qui garantissent des droits aux personnes en situation de TEH.
- ✓ Promouvoir le lancement de politiques publiques qui vont au-delà de la perspective pénale et victimisatrice.

7. CHANGER DE REGARD SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE TEH; DE VICTIMES À PROTAGONISTES

Les cadres régulateurs font référence aux femmes en situation de *traite* comme des «victimes» ou de possibles «victimes de traite». C'est pour cela qu'ont été développés des indicateurs servant à établir des profils listant les traits les identifiant. L'utilisation répétée du terme «victime» pour faire référence aux personnes qui ont été exploitées a certaines conséquences qu'il convient de mentionner rapidement. La première conséquence est la «position passive» dans laquelle cela les place. Selon l'approche pénale dominante dans le domaine de la *traite*, il semble que la victime soit une personne qui «n'a pas pu décider de son destin, qui se retrouve à vivre une situation problématique à cause d'un tiers» (Peruglia, Reiter y Laffitte 2013: 10). Les victimes de «*traite*» (celles dont il est fait référence dans le Plan Complet 2015-2018) sont des femmes qui ont rencontré de nombreux obstacles dans leurs pays d'origine, lors de leurs transits migratoires et dans leurs lieux de destination. Accepter sans critique cette position, c'est accepter de fait la singularité du statut et la passivité des femmes au cours de toutes les parties du processus. Nous les défendrions en nous basant sur leurs besoins et leurs carences sans prendre en compte leurs capacités et leurs résistances.

Nous considérons qu'il est plus convenable de parler de personnes en situation de *traite*, pour rompre avec l'étatisme qui donne le statut de «victime», comprenant qu'il existe un dynamisme propre au paradoxe de vulnérabilité et de résistance (Butler, 2001) qui transcende la diversité de situations que vivent ces femmes.

Une seconde conséquence claire sont les «limitations existantes pour la réparation». Dans le cas concret qui nous concerne, il semble que les «victimes de traite» auraient «les avantages pour accéder à des services sociaux et de santé» (Alcázar y Cabeza 2017: 90), malgré le fait, comme le disent par la suite les auteures, que ces avantages se transforment en des inconvénients dû aux difficultés pour les protéger.

Dans le cas de l'Espagne, la distinction établie entre la «détection» de «victimes de traite», pouvant être réalisée par les travailleurs sociaux, et «l'identification» pouvant seulement être réalisée par les forces de l'ordre, rend difficile la question de la protection et de la garantie des droits. Cette distinction donne une importance particulière aux forces de l'ordre dans l'identification, bien que dans le *Protocole Cadre de Protection de Victimes de Traite* (2011) il soit fait mention de la collaboration des entités sociales avec les forces de l'ordre, ainsi que des modèles d'action pour la détection, l'identification, l'assistance et la protection des «victimes de traite d'êtres humains». Cette référence à la collaboration de travailleurs sociaux, bien qu'elle tente d'atténuer la dureté du processus d'identification, suscite tout de même la méfiance :

La crainte envers les autorités ne se manifeste pas seulement lors d'occasions exceptionnelles, elle accompagne aussi tout contact avec le public et est fondamentalement due à la peur de l'expulsion, pour absence de permis de résidence ou de déclaration du travail réalisé (Acien 2014).

Le nombre de victimes identifiées en Espagne continue à être faible si on prend en compte les conditions difficiles qu'elles doivent remplir. En Espagne, on leur accorde actuellement une période de réflexion de 90 jours (Protocole du cadre de protection des victimes de TEH, 2011) ce qui n'est pas seulement insuffisant pour arriver à créer des relations de confiance et rompre la peur envers les mécanismes de contrôle de l'État, mais omet également les hésitations à dénoncer des proches (membres de la famille, conjoints, chefs de communautés...) avec qui elles ont pu créer un double lien de protection et d'exploitation (Garcia : 2017).

Une conséquence additionnelle est la perpétuation du stigmate et la négation de la capacité à agir. L'application du statut de victime qui est reproduit par les discours politiques et dans les pratiques sociales continue à perpétuer le stigmate des femmes qui sont en situation de TEH. Nous partageons avec Mansur (2017 : 8) que «la reconnaissance d'une victime générale - manquant même d'histoire - élimine l'autonomie des individus, les transformant en des êtres inertes et sans capacité d'agir». La plupart des discours des autorités et des politiques publiques présentent les femmes en situation de *traite* comme : «trompées», «obligées» et «contraintes», occultant la capacité d'agir qu'ont ces mêmes femmes de décider au cours des diverses situations qu'elles traversent. De plus en plus d'études donnent la voix à ces femmes et permettent de laisser voir leurs actions (Flamtermesky, 2014, Jorge, Antolinez y Cordero, 2017). Les personnes en situation de *traite* sont les actrices de leur propre vie et en tant que tel leur voix et leurs initiatives doivent orienter le processus d'intervention, en nous apprenant à nous défaire de nos discours de «sauvetage» et de nos pratiques «compensatoires».

BONNES PRATIQUES

- ✓ Donner la parole aux personnes en situation de TEH pour connaître leurs besoins et leurs demandes, afin d'orienter les ressources d'intervention de manière à ce qu'elles répondent à leurs besoins.
- ✓ Renforcer les capacités de ces femmes à partir d'interactions, depuis des modèles de relation moins bureaucratiques et créateurs de relations de confiance.

8. FAIRE «QUELQUE CHOSE» DE CE QU'IL RESTE À FAIRE : DÉCONSTRUIRE LES PRATIQUES D'INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES QUI SONT EN SITUATION DE TRAITE

Il est intéressant de voir que la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'aide aux personnes qui sont en situation de TEH dans les trois contextes étudiés retombe sur la société civile, due au manque de responsabilité des pouvoirs publics.

Dans le cas de l'Espagne, en continuant avec la logique qui imprègne les discours politiques, l'intervention auprès des personnes qui sont en situation de TEH est principalement orientée vers les femmes qui sont exploitées sexuellement. Cependant, bien que le Plan Complet (2016-2018) fasse également mention des filles, le nombre d'entités existantes pour aider les mineures en situation de TEH ou en passe de le devenir est réduit.

Malgré la reconnaissance des mineures et des mineurs comme population vulnérable, il existe des difficultés d'intervention provenant de la faible reconnaissance de ces situations et du manque de mesures politiques concrètes. Les migrants mineurs qui arrivent en Espagne (Fundación Raices, 2014) sont classés de manière générale comme MENAS (Mineurs Étrangers Non Accompagnés) et sont considérés comme tels, occultant les situations de *traite* qu'il peut y avoir, étant donné l'inexistence de professionnels et de moyens spécifiques pour détecter ces cas.

Pour mettre en place des pratiques qui garantissent le «bon traitement» des mineurs, il est nécessaire en Andalousie de créer des centres avec du personnel spécialisé, en évitant de la sorte de devoir renvoyer ces mineurs vers le système de protection général. Ce système n'est pas préparé et ne répond pas aux conditions requises permettant d'offrir un service adéquat à ceux qui se trouvent dans ces situations si spécifiques.

Au Maroc, les mineurs se retrouvent désemparés, le système de protection de l'enfance ne garantissant pas leur accueil, leur aide et leur accompagnement. La vulnérabilité fait que de nombreux mineurs essaient de traverser la frontière à la recherche d'accueil dans des centres, conscients des facilités que leur offre leur condition de MENAS dans les pays européens. Des cas ont été rapportés de familles qui abandonnent leurs mineurs, sachant qu'ils vont être aidés, comme nous avons pu le constater au CETI de Ceuta.

Dans le cas des filles marocaines, le phénomène de TEH se manifeste par l'existence des «petites bonnes», comme il a déjà été dit. Elles sont placées par des intermédiaires, qui la plupart du temps sont membres de la famille, dans des maisons pour travailler comme employée de maison. La société civile dispose de programmes spécifiques adressés à la prévention et à l'éradication de ce phénomène. Des campagnes de sensibilisation ont été menées en milieu urbain

et rural pour faire prendre conscience aux familles et aux autres acteurs de la précarité dans laquelle vivent ces filles. Elles se chargent également de dénoncer les situations qu'ils détectent et réclament le respect de la loi de scolarisation et l'interdiction du travail infantile. L'autonomisation de la population est la stratégie utilisée par les entités qui voient dans l'action sociale et éducative l'outil adéquat pour prévenir la situation de TEH.

Dans le cas du Cameroun, la situation de précarité des mineurs qui travaillent depuis le plus jeune âge est considérée normale. Plusieurs entités affirment que ce sont les enfants eux-mêmes qui demandent à leur famille qu'ils les envoient travailler au marché dû à leur situation économique. Dans le sud du pays, ce sont les familles qui cèdent leurs enfants à des intermédiaires pour qu'ils les fassent travailler dans d'autres régions afin d'en tirer des revenus. En général, les intermédiaires sont des personnes de l'entourage : un membre de la famille proche ou un chef spirituel qui est considéré comme «personne de confiance».

Au Maroc, les femmes disposent d'une aide spéciale étant donnée leur condition de collectif vulnérable. Les organisations disposent actuellement de différents dispositifs d'accueil, d'orientation et d'accompagnement, grâce aux projets de Coopération Internationale. Les efforts qui sont réalisés au sein des entités pour offrir une aide psychosociale et humanitaire dépendent du financement externe. Une fois que la subvention est retirée, elles doivent se tourner vers des bénévoles pour continuer à jouer leur rôle.

Au Cameroun, il n'existe quasiment pas d'entités pour aider les femmes en situation de *traite*, étant donné que comme l'ont dit certains professionnels d'institutions humanitaire, la TEH est acceptée socialement comme un risque que prennent volontairement les femmes, un risque faisant partie de leur processus migratoire vers l'Europe.

Au sein de la société civile, on travaille sur les thèmes de l'intervention sociale et éducative, d'une part en menant à bien des campagnes de sensibilisation dans les communautés sur l'exploitation sexuelle ou professionnelle, et d'autre part des alternatives de formation sont offertes, comme des programmes de formation professionnelle pour qu'elles puissent accéder à une profession qui leur permette de gagner de l'argent. Il existe des pratiques où la famille et l'enfant font partie d'un projet commun qui implique un processus d'accompagnement. De cette forme, la famille soutient les initiatives vers les mineurs qui sur le long terme leur seront également bénéfiques.

Au Cameroun, il existe des réseaux de lutte contre le travail des mineurs, contre la TEH et pour la revendication des droits de l'homme, même s'ils travaillent de pair avec la société civile, ils restent très éloignés des acteurs publics et des universités.

En Espagne, les femmes sont prises en charge par des organisations de la société civile dédiées à l'intervention dans les contextes d'exclusion ou

d'immigration. La plupart des entités espagnoles organisent leur intervention auprès de femmes «victimes» d'exploitation sexuelle autour des services suivants : accueil, orientation professionnelle, assistance médicale, juridique, psychologique, et formation en vue de l'autonomisation.

Le caractère provisionnel des programmes, la bureaucratisation, les urgences pour répondre aux besoins basiques et le faible engagement des pouvoirs publics sont un exemple des obstacles auxquels sont confrontés les professionnels. La faible enveloppe pour les budgets et l'absence de Loi Globale qui prend en compte toutes les situations de *traite* et les personnes possiblement impliquées empêchent de donner depuis l'intervention sociale des réponses globales aux personnes en situation de TEH.

Il est important d'enquêter sur le rôle joué par les agents d'intervention étant donné que certaines pratiques visant à la transformation sociale et au bien-être, sans le vouloir expressément, peuvent être imprégnées de gestes orientés vers le contrôle des populations, l'individualisation des problèmes sociaux et l'administration des inégalités pour garantir le maintien du status quo (Moreno et Molina 2018).

L'objectif de l'intervention sociale doit être orienté vers l'accompagnement des processus des personnes qui sont en situation de TEH, au-delà du contrôle, sans mal interpréter leurs décisions et en évitant les processus de revictimisation. Une intervention, à moyen et long terme, qui serait marquée par les «contingences des rencontres» (Moreno et Molina 2018) et qui prendrait conscience que les femmes peuvent être les actrices de leurs projets de vie. Les propositions d'intervention qui essaient de reproduire les ordres biaisés des politiques dominantes sont vouées à l'échec, il est impossible pour elles de reproduire au quotidien les idéologies qu'elles défendent étant données les contradictions montrées dans les expériences pratiques avec les femmes :

Le discours et les pratiques de l'altérité ont aussi défini les femmes immigrantes selon un certain idéal de l'émancipation féminine qui est, fréquemment, le modèle de la femme occidentale (Mayorga, 2012 : 57).

D'autre part, les universités doivent contribuer à l'avancée de l'analyse du phénomène de la TEH, incluant comme forme de connaissance les discours et les pratiques des travailleurs sociaux et des voix et des expériences des personnes en situation de TEH en se basant sur le respect et la responsabilité partagée.

BONNES PRATIQUES

- ✓ Déconstruire les discours et les pratiques qui utilisent la vulnérabilisation des droits de la personne en situation de TEH pour répondre aux intérêts idéologiques orientés vers la «poursuite des délits» et le contrôle étatique.
- ✓ Inclure comme sujets de l'intervention sociale les mineurs et mineures et d'autres collectifs.
- ✓ Créer des liens entre l'université, les pouvoirs publics et la société civile pour faire avancer la connaissance du phénomène de la TEH.

9. LA COOPERATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DOIT AVOIR UN REGARD CRITIQUE ET GLOBAL SUR LA «TRAITE D'ÊTRES HUMAINS»

La coopération internationale pour le développement est passée par plusieurs phases au cours de l'histoire. Elle a été établie dans un premier temps comme outil de développement hégémonique, c'est-à-dire comme outil du concept qui est apparu dans le sillage de la course au développement énoncée dans le discours du président Truman (1947). Dans ce discours, il affirmait qu'il y avait assez de ressources sur la planète pour en finir avec la pauvreté. À partir de cette idée, une dichotomie a été établie entre pays développés et pays sous-développés, établissant de ce fait un modèle unique et hégémonique du développement : le développement comme élément universel.

De cette manière, la coopération internationale apparaît comme l'outil principal de ce modèle, en créant de plus une structure d'organismes internationaux, financiers ou non (Breton Woods, Consensus de Washington, etc.) pour faciliter aux pays la course au développement, en générant de la dette et en établissant des priorités financières. Cette course au développement a créé une brèche mondiale qui nous a poussés à parler pendant des décennies de Nord et de Sud.

Pour ce qui est du Sud, nous nous concentrerons ici sur l'Afrique, où se situent les principaux pays d'origine de la «traite d'êtres humains», même si nous pouvons établir des parallèles avec l'Europe de l'est, l'Amérique latine et les pays asiatiques. Des régions qui sont restées à la traîne du développement hégémonique, particulièrement pour le cas de l'Afrique. Cette course au développement n'est pas seulement un concept lié aux économies, il établit également un idéal culturel où n'importe quelle personne, de n'importe quel pays peut affirmer qu'elle vit dans un pays «développé» ou non. Il est évident que, avec cette dichotomie, les individus se trouvant dans les régions non «développées»

créent des projets migratoires avec l'idée de vivre dans des régions où la qualité de vie est liée à un indice de développement humain (IDH).

Ce flux migratoire comporte des éléments d'auto-défense du système global, en établissant des frontières physiques, de réglementation ou bureaucratiques pour la libre circulation des personnes. C'est dans cette situation que s'établit le concept de «traite d'êtres humains».

Le manque d'opportunités permettant de circuler librement à travers différentes frontières, créé par le même système qui les ferme, est ce qui facilite les situations de «traite d'êtres humains». On ne peut pas comprendre le phénomène de la *traite* sans établir de relations directes avec le modèle hégémonique du développement. Par conséquent, la coopération internationale à travers ses principaux organismes internationaux va difficilement aborder la problématique depuis une perspective globale.

Pour pouvoir visualiser ce qui a été abordé au préalable, nous pouvons utiliser l'exemple des Objectifs de Développement Durable de l'Agenda 2030, lancés par le PNUD et les pays membres. Nous pouvons penser que ces objectifs, notamment le premier (en finir avec la pauvreté) et le cinquième (l'égalité de genre), sont en lien avec «la traite d'êtres humains». Cependant, ces objectifs ne sont que descriptifs et ne donnent pas d'outils concrets qui remettent en doute le système mondialisé. C'est là que nous devons rendre visible la coopération internationale plus novatrice, la coopération décentralisée, en lien avec les ONG, les municipalités locales, les universités, les syndicats et tout une infinité d'organisations.

Le plan andalou de coopération pour le développement, le PACODE, est un outil qui permet aux entités andalouses de dresser des éléments qui sont en lien avec le travail sur la *traite* de personnes depuis une perspective plus large. Notre projet s'inscrit dans cette réglementation qui établit comme éléments principaux la réaffirmation du besoin de coopération internationale, l'approfondissement du sujet dans les espaces des acteurs de coopération et le débat des éléments et de zones prioritaires d'action.

Dans ce cadre, le PACODE fait précisément référence à la contribution à la défense des droits de l'homme, la promotion de la paix et les valeurs démocratiques. La «traite d'êtres humains» est un élément essentiel dans ce contexte, rendant ainsi visible une problématique qui se caractérise par la complexité de définition du concept.

De même, depuis la coopération décentralisée et l'organisation civile, il est possible de donner quelques suggestions pour travailler contre «la traite d'êtres humains».

1. *Dans les pays de destination.* Influence politique : établir des processus où on rend visible la difficulté des personnes à se déplacer librement principalement à cause de politiques publiques étatiques et régionales.

- Rendre visible les personnes en situation de *traite* : le besoin de rompre les clichés pour pouvoir dresser la complexité du problème.
2. *Dans les pays de transit.* Dans les pays qui font partie de l'itinéraire migratoire, il est nécessaire d'avoir une plus grande sensibilisation de la société civile et des différentes administrations, ainsi que d'établir des espaces de visibilité de la problématique et des personnes en transit vers les pays européens, dans le cas de l'Afrique.
 3. *Dans les pays d'origine.* Soutenir des processus établissant des éléments qui facilitent l'autogestion des territoires, pour que les projets migratoires émanent du choix libre des personnes et non pas du besoin impérieux d'émigrer.
 4. *De manière globale.* Dresser une perspective féministe du concept. La *traite* ne peut pas se comprendre correctement si nous ne partons pas de ce qui affecte de manière inégale les hommes et les femmes, établissant des espaces de plus grande vulnérabilité pour les femmes et les mineurs qui sont exposés à des situations plus dures et plus violentes (sur le chemin, dans le pays de destination, etc.).

Depuis la perspective de la coopération sud-sud, l'articulation de réseaux et de gouvernements nationaux et locaux, afin de faciliter une plus grande sensibilisation auprès de la société civile et des pays de destination, en établissant de la sorte des stratégies communes. Les projets qui établissent le développement humain local dans les zones frontalières facilitent une coordination plus poussée entre les différentes organisations.

BONNES PRATIQUES

- ✓ Analyser la *traite* de personnes comme le résultat d'un modèle hégémonique mondial de développement, pour que la coopération internationale puisse travailler sur la base structurelle du problème.
- ✓ Travailler sur l'origine, pour soutenir des processus de participation citoyenne et d'autogestion des territoires.
- ✓ Travailler sur la destination à travers l'incidence politique et sous une perspective féministe, en établissant de la sorte un processus de changements structurels dans les politiques publiques, particulièrement migratoires.
- ✓ Nouer des alliances en se basant sur la coopération décentralisée et la coopération sud-sud, comme des espaces novateurs de collaboration qui permettent une plus grande articulation entre les réseaux d'organisations qui travaillent contre «la traite d'êtres humains»

10. POUR ABORDER LA TRAITE DEPUIS LA PERSPECTIVE DES DROITS DE L'HOMME IL FAUT ROMPRE AVEC LA SEULE PERSPECTIVE NORMATIF

Faire une analyse du concept de *traite* depuis la perspective classique des droits de l'homme nous positionne dans un cadre réglementaire et juridique. Cela nous oblige à comprendre que les personnes ont le droit de se déplacer librement entre les frontières. Mais depuis cette perspective on ne parle pas des valeurs, ni de la possibilité de mettre en place des procédés qui facilitent le droit à le faire, étant donné que depuis cette perspective la *traite* est essentiellement considérée depuis le point de vue normatif, dans un contexte juridique. C'est-à-dire que cela place les personnes comme des éléments individuels et autonomes avec des droits, sans dresser d'autres perspectives qui sont nécessaires pour comprendre la complexité de la TEH.

Dans cette optique, l'«autre» est appréhendé d'une manière générale, et le juriste face à cela s'inquiète principalement des garanties légales qui permettent à ces personnes d'avoir ces droits. C'est-à-dire que depuis une perspective classique des droits de l'homme, la TEH se concentre sur le droit à avoir des droits.

Cette perspective rend difficile la manière d'aborder les droits de l'homme et la *traite* de personnes, puisque la réglementation ne nous permet pas d'établir d'éléments structurels à la source du problème. Il faut appréhender la TEH d'une manière globale comme le produit de multiples facteurs : socio-historiques, économiques et normatifs.

Par conséquent, pour analyser la TEH depuis la perspective des droits de l'homme, nous nous positionnons dans un paradigme critique, comprenant que les « Droits de l'Homme sont des processus sociaux, normatifs, économiques et politiques qui ouvrent ou consolident des espaces de lutte pour la dignité humaine» (Herrera, 2008).

Comme il a été signalé, en partant de ce concept, nous devons comprendre autant les conditions de discrimination que la base systématique ou structurelle qui les produit. Dans le cas de la traite de personnes, on subit le fait de pas pouvoir exercer le libre exercice de se déplacer entre les frontières, ce qui pousse les personnes, dans beaucoup de cas et de manière forcée, à ébaucher des plans qui vont à l'encontre de leur propre dignité. Aborder la traite depuis la perspective de ce paradigme nous oblige, d'une part, à

- *Rendre visible*, en réalisant une analyse épistémologique du problème. Dans ce cas, la *traite* est un élément qui doit prendre en compte la diversité territoriale qu'elle affecte. Dans les pays d'origine (en prenant en compte qu'il n'existe pas d'homogénéité entre eux), la raison pour laquelle une personne se trouve dans cette situation est très diverse,

cependant, il faut partir d'un point commun : le besoin inhérent de l'être humain à se déplacer dans l'espace et de trouver des espaces où il aura une plus grande accessibilité à des biens matériels et immatériels qui donnent accès à la dignité humaine. C'est-à-dire, la *traite* est un élément additionnel, lié aux processus migratoires qui sont causés par l'inégalité mondiale existante, et par la difficulté de pouvoir accéder avec une plus grande facilité à des pays d'indice de développement humain élevé. Dans le cas de l'Afrique, nous ne pouvons pas comprendre cette situation si nous ne l'analysons pas depuis une perspective décoloniale, puisque c'est un territoire influencé et exploité depuis des siècles par des pays externes qui ont créé des situations de forte inégalité dans la région, avec de graves problèmes économiques et sociaux. Dans les pays de transit, la problématique est liée à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent particulièrement les femmes et les mineurs sur la route vers les pays de destination. En particulier dans les pays de destination, le principal problème est la situation d'exploitation dans laquelle se trouvent les personnes qui ont réussi à y arriver grâce à une dette contractée pour financer le trajet.

- *Déstabiliser*, en nous positionnant de manière éthique face à la situation d'exploitation de ces personnes. Cela nous pousse à exiger, à travers la sensibilisation et l'incidence politique, des changements dans les politiques transfrontalières. Le besoin de mettre en évidence les liens entre la *traite* de personnes et d'autres facteurs comme la migration et les frontières est indispensable pour ne pas seulement focaliser l'attention sur le milieu de la prostitution et le trafic de personnes. Aborder la traite depuis la perspective du paradigme de la théorie critique des droits de l'homme exige de rendre plus complexe le concept et plus visible les nuances.
- *Transformer*, en proposant des procédés politiques qui créent des espaces de dignité humaine. Dans un cadre adéquat, établi par la liberté de circulation de personnes, nous pourrons fixer des mesures qui empêchent les «réseaux de traite» et qui permettent d'éviter l'exploitation, toujours depuis un point de vue féministe qui nous permet d'implanter et de comprendre que la plus grande vulnérabilité est vécue par les femmes et les mineurs.

Travailler depuis la perspective des droits de l'homme nous mènent à créer des espaces de lutte, où tous territoires, depuis la perspective de leur propre contexte et de leur propre culture, depuis le critère de la richesse humaine et depuis une position féministe décoloniale, permettent aux personnes d'avoir une vie digne.

BONNES PRATIQUES

- ✓ Remettre en contexte la *traite* de personnes au sein du modèle économique mondial, en l'analysant comme le résultat de processus et de flux migratoires actuels.
- ✓ Créer des procédés de lutte pour la dignité des personnes affectées par la *traite*, en établissant des éléments d'autonomisation, particulièrement pour les secteurs les plus vulnérables.

BIBLIOGRAFÍA

- AJAAOUANI, N. (2013). "La realidad jurídica y social de les petites bonnes en Marruecos". En *V Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres*, (pp. 15-31). [Consultado 29 de noviembre de 2018]. Recuperado de http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/v_congreso_mujeres/comunicaciones/la_realidad_juridica_y_social.pdf
- ALCAZAR, A. y CABEZAS A. (2017). "El paradigma discursivo en torno a la "víctima de trata". Intervención social con mujeres dominicanas en Puerto Rico". *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, pp.85-102.
- ALPES, M. J. (2012). "Bushfalling at all cost: The economy of migratory knowledge in Anglophone Cameroon". *African Diaspora*, 5(1): pp. 90-115.
- ALPES, M. J. (2013). "Law and credibility of migration brokers: The case of emigration dynamics in Cameroon". *IMI Working Papers Series*, 80. [Consultado el 1 de noviembre de 2018]. Recuperado de <https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/1036225>
- ALPES, M. J. (2014). "Female spouses at the doors of fortress Europe Marriage and security at consulate offices in Cameroon". *Political Communication*, 17(3): pp. 245-258.
- ANDERSON, B., y ANDRIJASEVIC, R. (2008). "Sex, slaves and citizens: The politics of anti-trafficking". *Soundings*, 40, pp. 135-145.
- ANDERSON, B., y O'CONNELL, D.J. (2002). *Trafficking-A Demand Led Problem?* Stockholm: Save the Children Sweden.
- ANDERSON, B., y ROGALY, B. (2005). *Free market, forced labour?* London: TUC.
- ASSOCIATION CAMEROUNAISE DE DIFFUSION ET DE VULGARISATION DU DROIT (2011). *Lutte contre le trafic et la traite des personnes loi N°2011/024* [Consultado 11 de noviembre de 2018]. Recuperado de <https://www.camerlex.com/lutte-contre-le-trafic-et-la-traite-des-personnes-8435>
- BRENNAN, D. (2005). "Methodological challenges in research with trafficked persons: tales from the field". *Internacional Migration*, 43(1-2): pp. 35-54.
- BUTLER, J. (2001). *El género en disputa. El feminismo y subversión de la identidad*. México : Universidad Autónoma de México.
- CALAVITA, K. (2004). "Work, immigrant marginality, and integration in new countries of immigration". En Gonzalez, G., Fernandez, R., Price, V., Smith, D., y Vo, L. (eds.), *Labour Versus Empire*, pp. 133–42. New York: Routledge.
- CARRINO, L. (2009). *Perlas y piratas: Crítica de la cooperación para el desarrollo y nuevo multilateralismo*. Barcelona: Icaria.
- CONSEJO DE EUROPA. (2005). "Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos". *Boletín Oficial del Estado*, núm. 219, de 10 de septiembre de 2009.

- COMITÉ NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME. (2016). *La lutte contre la traite des personnes Avis du CNDH sur le projet de loi N° 27-14.* [Consultado el 27 de octubre de 2018]. Recuperado de https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/10-cndh_-_traite_fr_-.pdf
- COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO. (2018). *Camerún: Informe general.* Madrid: CEAR. [Consultado el 23 de noviembre de 2018]. Recuperado de <https://boletinderechoshumanos.files.wordpress.com/2018/03/camerc3ban-2018-informe-general.pdf>
- CORDERO, N. (2014). "Trata con fines de explotación sexual: Derechos humanos que mal-tratan a las humanas". *Gazeta de Antropología*, 30.
- CRAIG, G., GAUS, A., WILKINSON, M., SKRIVANKOVA, K. y MCQUADE, A. (2007). *Contemporary slavery in the UK: Overview and key issues.* York: Joseph Rowntree Foundation. [Consultado 17 de noviembre de 2018]. Recuperado de <https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/2016-contemporary-slavery-uk.pdf>
- DE SOUSA SANTOS, B. (2009). *Una Epistemología del sur: La reinvenCIÓN del conocimiento y la emancipación social.* Buenos Aires: Siglo XXI.
- DOEZEMA, J. (2004). "¡A crecer! La infantilización de las mujeres en los debates sobre tráfico de mujeres". En Osborne, R. (ed.), *Trabajador@s del Sexo: Derechos, Migraciones y Tráfico en el Siglo XXI* (pp. 151-166). Barcelona, Bellaterra.
- EKWE-EKWE, H. (2010, 13 de mayo). "¿Qué es esto de África subsahariana?". *Pueblos: Revista de Información y Debate.* [Consultado el 18 de noviembre de 2018]. Recuperado de <http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article1873>
- ESCOBAR, A. (1998). *La invención del Tercer Mundo: Construcción y deconstrucción del desarrollo.* Barcelona: Norma.
- FLAMTERMESKY, H. (2014). "Experiencias de investigación feminista: Propuestas y reflexiones metodológicas". *Athenea Digital: Revista de pensamiento e investigación social*, 14(4), pp. 389-400.
- FRONTEX. (2011). *Situational overview on trafficking in human beings.* Warsaw: European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. [Consultado 22 de noviembre de 2018]. Recuperado de https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Situational_Overview_on_Trafficking_in_Human_Beings.pdf
- FUNDACIÓN RAÍCES. (2014). *Solo por estar solo: Informe sobre la determinación de la edad en menores migrantes no acompañados.* Madrid. Fundación del Consejo General de la Abogacía Española.
- JORGE, E. ANTOLINEZ, I. y CORDERO, N. (2017) *Irioweniasi: El hilo de la luna.* Sevilla: Benilde.
- FLEISCHER, A. (2007). "Family, obligations, and migration: The role of kinship in Cameroon". *Demographic Research*, 16, pp. 413-440. [Consultado el 11 de septiembre de 2018]. Disponible en <http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol16/13/>
- GANDARA, M. (2013). *Hacia un pensamiento crítico en derechos humanos: Aportes en diálogo con la teoría de Joaquín Herrera Flores* (tesis doctoral). Sevilla:

- Universidad Pablo De Olavide. [Consultado 17 de octubre de 2018]. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10433/628>
- GARCIA, M. J. (2017). "La política migratoria actual y las desigualdades ¿fomentan las redes de trata de seres humanos? El contexto nigeriano, una mirada del Trabajo Social con perspectiva de género". *Cuadernos de Trabajo Social*, pp.35-45.
- HERRERA, J. (2008). *La reinvencción de los derechos humanos*. Sevilla: Librería Atrapasueños.
- KAH, H. K. (2016). "Child trafficking across the Cameroon/Nigeria border: A historical perspective". *Covenant University Journal of Politics and International Affairs*, 4(1), pp. 1-16.
- JULIANO, D. (2005). "El trabajo sexual en la mira: Polémicas y estereotipos". *Cuadernos Pagu*, 25, pp. 79-106.
- LEY ORGÁNICA 4/2015, de 30 de Marzo, de Protección de la seguridad ciudadana. Boletín Oficial del Estado, núm. 77, de 31 de marzo de 2015.
- LINDIO-MCGOVERN, L. (2003). "Labor export in the context of globalization: The experience of filipino domestic workers in Rome". *International Sociology*, 18(3), pp. 513-534.
- LLORENT, V. (2013). "Las petites bonnes marroquíes: Causas y consecuencias socio-educativas". *Revista Educatio Siglo XXI*, 31(1), pp. 335-356.
- MANSUR, G. (2017). "Trata de personas, tráfico de migrantes y la gobernabilidad de la migración a través del crimen". *Etnográfica*, 21(3), pp. 1-13.
- MAYORGA, C. (2012). "Articulaciones de la exclusión: La política de atención a prostitutas inmigrantes en Madrid". *Si Somos Americanos: Revista de Estudios Transfronterizos*, 1, pp. 49-74.
- MINISTERIO DE IGUALDAD. (2008). *I Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (2008-2011)*. Madrid: Ministerio de Igualdad. [Consultado 14 de mayo de 2018]. Recuperado de https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=2780
- MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. (2015). *II Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018)*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. [Consultado 19 de junio de 2018]. Recuperado de http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/planActuacion/planContraExplotacionSexual/docs/Plan_Integral_Trata_18_Septiembre2015_2018.pdf
- MORENO, A. y MOLINA, N. (2018). "La intervención social como objeto de estudio: Discursos, prácticas, problematizaciones y propuestas". *Athenea Digital: Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 18(3), e2055. [Consultado 4 de noviembre de 2018]. Recuperado de <https://atheneadigital.net/article/view/v18-n3-moreno-molina/2055-pdf-es>
- NIEUWENHUYSEN, C. (2007). "Human trafficking, information campaigns, and strategies of migration control service international de recherches". *American Behavioral Scientist*, 50(12), pp. 1674- 1695.
- NOHLEN, D. (2011). "El contexto en el análisis del politólogo". *Inverscios*, 2, pp. 1-20.
- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. (2000). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

- Transnacional (Protocolo de Palermo). [Consultado 24 de noviembre de 2018]. Recuperado de http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. (2003). *Instrumento de Ratificación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000*. Boletín Oficial del Estado, núm. 296, de 11 de diciembre de 2003.
- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. (2009). *Informe sobre desarrollo humano 2009: Superando barreras, movilidad y desarrollo humanos*. Madrid: Mundi Prensa. [Consultado 17 de octubre de 2018]. Recuperado de http://hdr:undp.org/sites/default/files/hdr_2009_es_complete.pdf
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACIONES. (2018). *Informe sobre las Migraciones en el Mundo*. Ginebra: OIM. [Consultado 23 de septiembre de 2018]. Recuperado de https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
- PANIKKAR, R. (2007). *Mito, fe y hermenéutica*. Barcelona: Herder.
- PERUGLIA, A., REITER, P., Y LAFFITTE, L. (2013). "La idea de víctima en los procesos identitarios de los Peticionantes de Asilo". El lugar de la Intervención Institucional X Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires[Consultado 24 de noviembre de 2018]. Recuperado de <http://cdsa.aacademica.org/000-038/695.pdf>
- PISCITELLI, A, y LOWENKRON, L. (2015). "Categorias em movimento: a gestão de vítimas do tráfico de pessoas na Espanha e no Brasil, *Ciência e Cultura*, 67 (2), pp.35-39.
- RESTREPO, E., y ESCOBAR, A. (2004). "Antropologías del Mundo". *Jangwa Pana Revista de Antropología*, 3, pp. 110-131.
- RIST, G. (2002). *El desarrollo: Historia de una creencia occidental*. Madrid. Cataratas.
- WOMEN'S LINK WORLDWIDE. (2014). *La trata de mujeres y niñas nigerianas: Esclavitud entre fronteras y prejuicios*. Madrid: Womens Link Worldwide. [Consultado 2 noviembre de 2018]. Recuperado de <https://www.womens-linkworldwide.org/files/1355/la-trata-de-mujeres-y-ninas-nigerianas.pdf>

